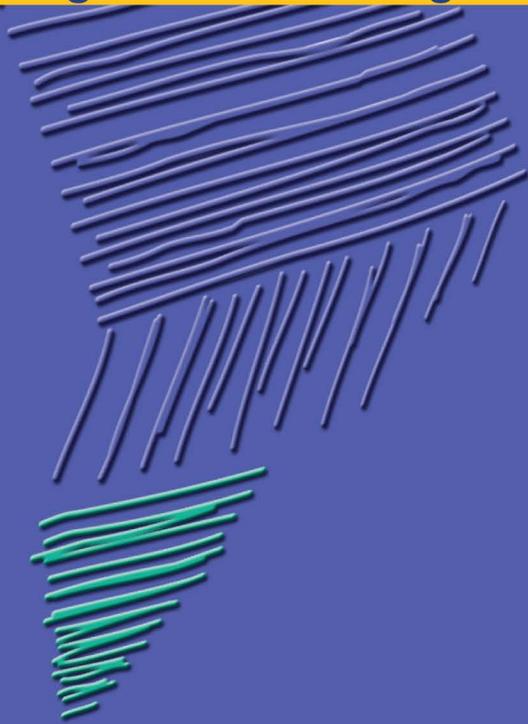


**Nuevos retos de la integración
en América Latina y el Caribe:
¿profundización o fragmentación del regionalismo?**



**Woodrow Wilson
International
Center
for Scholars**

ildis
Instituto
Latinoamericano
de Investigaciones
Sociales

Nuevos retos de la integración en América Latina y el Caribe: ¿profundización o fragmentación del regionalismo?



**Woodrow Wilson
International
Center
for Scholars**



©Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP
1ª edición, septiembre 2007

Hecho el depósito de Ley
Depósito legal: lf25220073003481
ISBN: 978-980-7082-01-3

Producido por:



CDB publicaciones

Transcripción de textos, edición y corrección: Helena González

Diseño gráfico y montaje electrónico: Michela Baldi

Impreso por L+N XXI Diseños, C.A.

Índice

Presentación

Woodrow Wilson Center for Scholars / ILDIS / INVESP 5

Introducción

Rut Diamint 7

I

Relaciones Estados Unidos y América Latina

Carlos Romero 11

Comentaristas: *José Raúl Perales / Arlene Tickner*

II

La Alternativa Bolivariana para las Américas-ALBA

Edgardo Lander 19

Comentaristas: *Félix Arellano / Feijóo Colomine*

III

Impactos del conflicto haitiano sobre la integración caribeña

Manuel Carbonell 27

Comentaristas: *Elías Daniels / Antonio Romero*

IV

Geopolítica de la cuenca norte de América Latina: México y Centroamérica

Raúl Benítez 35

Comentaristas: *Demetrio Boersner / María Teresa Romero*

V

Crisis de la integración andina y perspectiva suramericana

Socorro Ramírez 43

Comentaristas: *Edgar Otálvora / Luis Fernando Fernández*

VI

Las tensiones versus las intenciones en Mercosur

Rut Diamint 49

Comentaristas: *Edmundo González / Flavio Carucci*

VII

Integración energética, seguridad regional y gobernabilidad democrática en América Latina

Elsa Cardozo 55

Comentaristas: *Antonio De Lisio / Rafael Quiroz*

Notas sobre los Ponentes 63

Listado de Participantes en el Seminario..... 65

Presentación

Por una iniciativa conjunta del Woodrow Wilson Center for Scholars, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, fue realizado en Caracas el Seminario Internacional “Nuevos retos de la integración en América Latina y el Caribe: ¿profundización o fragmentación del regionalismo?” durante los días 7 y 8 de mayo de 2007, con el objetivo central de promover el debate sobre los retos y perspectivas de los esquemas de integración propuestos desde y para la región, así como evaluar su impacto sobre las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe. El evento contó con la participación de representantes gubernamentales y del sector académico tanto venezolanos como de otros países de la región

Con este objetivo se desarrolló un amplio debate centrado en un diagnóstico sobre el estado actual de los diferentes procesos de integración que se adelantan en la región con la finalidad de formular recomendaciones para su fortalecimiento y para contribuir a lo que ha sido definido como la “reconfiguración” de la integración en América Latina y el Caribe. Las páginas que aquí presentamos recogen la memoria de esta actividad y tienen como propósito servir de apoyo a la discusión con elementos que puedan ser considerados para las futuras estrategias destinadas a fortalecer los diversos procesos de integración.

En este sentido, deseamos agradecer a los ponentes, comentaristas y asistentes al seminario por sus valiosas contribuciones. De igual forma a Helena González por la organización de este material y a Ana Melissa Zárraga del INVESP, a Osmar Torres, Marlys Aguilar y Bladimir Jiménez del ILDIS por su colaboración en la preparación y realización de esta actividad.

Kurt-Peter Schütt

Director del ILDIS

Representante en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert

Francine Jácome

Directora Ejecutiva del INVESP

Cynthia Arnson

Directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center for Scholars

Introducción

Rut Diamint

Este seminario se realizó en el marco del proyecto “Creando Comunidad de Seguridad en las Américas” del Woodrow Wilson International Center for Scholars, que tiene el propósito de avanzar en la conformación efectiva de una comunidad de seguridad que involucre a actores estatales, académicos, fuerzas armadas, sociedad civil y actores económicos y de los medios de comunicación con la finalidad de contribuir a un cambio en la administración democrática de la seguridad, lo que implica la maximización del poder civil sobre las fuerzas armadas, una efectiva gobernabilidad sobre el sector defensa en el marco de responsabilidades delimitadas clara y transparentemente, la despolitización militar, la desmilitarización de las relaciones vecinales, mecanismos de *accountability* sobre las decisiones y obligaciones en el ámbito de la seguridad y la defensa y —eminentemente— un amplio y reconocido involucramiento de diferentes grupos de la sociedad civil en los asuntos de defensa.

El proyecto de investigación Creando Comunidad pretende fomentar el debate estratégico promoviendo espacios para las iniciativas propias tanto nacionales como sub-regionales o hemisféricas y a lo largo del tiempo ha contribuido a centrar este debate entre académicos de Estados Unidos y América Latina, entre académicos y funcionarios públicos de los distintos países, y con organismos internacionales como la OEA. La difusión de avances de investigación mediante libros, boletines y cuadernos de trabajo, así como la organización y participación en Seminarios entre los años 2000 y 2007 han dejado huella y numerosos insumos. El proyecto contó con el valioso patrocinio de la Fundación Ford que hizo posible el desarrollo de tantas propuestas.

Interesa una concepción amplia de la cooperación en seguridad que contemple la cultura política y la presencia de la sociedad civil, factores claves en la definición de alianzas y amenazas. Es así como crecieron las expectativas sociales en relación con la rendición de cuentas gubernamental, la transparencia en los actos de gobierno y la legitimidad de los funcionarios. Ello también comprende el desarrollo de centros de investigación, expertos civiles independientes, grupos de interés y organizaciones no gubernamentales que tengan influencia sobre las decisiones de gobierno e impulsen un debate abierto.

Si bien en la última década aparecieron diferentes actores individuales, grupales e institucionales en el campo de la seguridad, no se logró constituir una comunidad de defensa nacional y menos aún una comunidad de defensa regional, independiente del Estado, pero con lazos formales e informales con el gobierno. El seminario en Caracas es un paso más para la profundización del nivel sub-regional del debate. En este sentido, se ubica en el marco de las preocupaciones de seguridad de las Américas.

La aceptación del concepto multidimensional de la seguridad debe ser entendida como la conformidad sobre el hecho de que, en el continente, cada Estado enfrenta diferentes ries-

gos a su seguridad y que lo que constituye una amenaza en un Estado no necesariamente lo es para otro. Las nuevas amenazas son transaccionales, aunque cada Estado —de acuerdo con sus objetivos políticos y su normativa legal vigente— administra qué tipo de respuestas institucionales pone en juego para enfrentar esos riesgos. Pero en sistemas democráticos y con procesos activos de integración regional se debe promover que cada Estado responda a estas amenazas de manera individual, cooperativa y transparente. Por ello el programa desarrolla actividades en las que participan representantes de diferentes países.

En esta etapa del proyecto se intenta debatir el siguiente interrogante: ¿que acción colectiva será aceptada en el hemisferio? La respuesta se orienta a utilizar con prioridad las capacidades institucionales, tanto multilaterales como nacionales. Así mismo, es preciso reconocer que para esa inter-relación el control democrático de las fuerzas armadas es un elemento esencial, proceso que presenta claros déficit: desde enclaves autoritarios en regímenes democráticos hasta ineficiencia en la conducción civil del instrumento militar. Quedan por delante muchas tareas, para las cuales un debate abierto, fundamentado y constante será inevitable a los fines de reforzar el Estado de Derecho.

Un rediseño institucional vinculado al desarrollo de una arquitectura flexible en el ámbito americano tiene que incluir mecanismos multilaterales como los recursos nacionales, jurídicos y políticos, orientándolos a que se constituyan en un *accountability regime* que ponga énfasis en los aspectos normativos y no puramente militares.

Para el fortalecimiento regional, las acciones emprendidas en un Estado tienen importancia e impacto en las naciones vecinas. Por ello el análisis y el intercambio de información sobre procesos nacionales constituyen un elemento central de esta construcción regional.

Sin transparencia ni coordinación se producen contradicciones que pueden ser aprovechadas por sectores interesados en minar la democracia, más ahora, cuando amenazas no tradicionales como terrorismo, criminalidad organizada y/o narcotráfico presionan sobre la definición de la agenda de seguridad y obligan a responder con instituciones que tienen claros límites legales para intervenir. Los conflictos continúan estando vinculados a la estabilidad de los regímenes democráticos, que pueden verse amenazados por una débil supremacía de las instituciones políticas en la definición y conducción de las políticas de seguridad y defensa.

El Seminario que se organizó para la discusión de estos temas y cuyas presentaciones se recogen en estas páginas forma parte del Capítulo Sudamericano de este proyecto. En esta etapa de la investigación se parte de un diagnóstico de la realidad sudamericana que está caracterizada por:

1. El retorno de una mirada hiper-realista de la realidad internacional, vehiculizada por la estrategia norteamericana.
2. Problemas de gobernabilidad en los cuales, las fuerzas armadas actúan en diferentes roles: en misiones de mantenimiento de la paz, como partido político, como instituciones de defensa civil, como fuerzas policiales ante la violencia.

3. La región presenta nuevas tensiones y fragmentaciones que van acompañadas por una fuerte tendencia al re-equipamiento, la modernización y el surgimiento de competencias hegemónicas.

El Capítulo Sudamericano también efectuó otras actividades como el taller “Seguridad Internacional y Relaciones en el Cono Sur”, organizado por FLACSO-Chile, el 23 de abril de 2007, un programa de entrenamiento de una semana dirigido a profundizar el análisis de los problemas de política exterior y de seguridad de Chile, Argentina, Bolivia, y Perú. Igualmente en Bogotá, Colombia, coordinado por la Universidad de los Andes, el seminario “El papel de América Latina en la crisis de seguridad andina,” que tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de 2007.

Para Creando Comunidad, la estrategia de colaborar en mantener acciones multilaterales de seguridad sigue siendo una propuesta necesaria, más aún frente al retroceso señalado anteriormente. El trabajo del Proyecto se orienta a sostener una acción concertada regional con una alta inclusión de políticos, académicos y medios de comunicación.

I

Relaciones Estados Unidos y América Latina

Carlos Romero

Comentaristas: José Raúl Perales / Arlene Tickner

La vinculación regional de Estados Unidos con América Latina se puede abordar desde dos puntos de vista: uno de carácter histórico y otro de carácter teórico. Este último surge a partir de la independencia de Estados Unidos y se plasma en tres interrogantes específicas: si América Latina debe emular —o no— a Estados Unidos en su gesta de 1776; otra, si Estados Unidos debe servir como garante de la independencia de América Latina en relación con la Doctrina Monroe y, en tercer lugar, el papel económico que juega América Latina en la región.

Desde la óptica de América Latina, hay una larga historia acerca de cómo debe ser esta vinculación que básicamente se puede organizar en torno a dos grandes escuelas: la tesis de la negligencia, la que permanentemente se queja de que Estados Unidos tiene abandonada a América Latina, y una escuela opuesta, que aspira a que Estados Unidos esté presente en todas y cada una de las decisiones latinoamericanas, lo que se puede identificar como la tradición “panamericana”.

Efectivamente, desde la Independencia de Estados Unidos, en la Doctrina Monroe, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alianza para el Progreso así como en la llamada *Equal Partnership*, y en cada una de las intenciones que ha tenido Estados Unidos para con Latinoamérica, los problemas señalados más que una limitación o un elemento de división se pueden considerar como una fuente de oportunidades porque también desde América Latina está planteada una discusión acerca de si la integración del siglo XXI debe hacerse con —o sin— Estados Unidos.

Este debería ser el marco a partir del cual establecer la discusión sobre la base del concepto de proceso: por una parte un proceso que, iniciándose con la independencia se plasma en el momento actual en el tema de la integración de América Latina sin Estados Unidos (el planteamiento de UNASUR), y por otra la discusión sobre el tema del ALCA —y su “contrafigura” el ALBA— y los mecanismos prácticos que Estados Unidos ha construido frente a los pocos adelantos que ha tenido su propuesta del ALCA como son los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC).

Con base en ese marco general se pueden enumerar algunos principios fundamentales: — que la relación actual entre Estados Unidos y América Latina se inscribe en un marco de tensiones asociadas al terrorismo, al problema de los Estados “forajidos”, al problema de las alianzas y a la visión que, entrando este siglo XXI, ha tenido Estados Unidos acerca del tema de

la construcción de la democracia. Estos son aspectos que en este momento hay que vincular con la forma como Estados Unidos cree que debe tener esa relación;

— las dos escuelas antes señaladas que proponen cómo puede abordarse la relación entre América Latina y Estados Unidos están presentes actualmente respecto al tema de la integración. Asumida desde la perspectiva de la identidad (y sobre esto hay una amplísima literatura) se entiende que sus elementos fundamentales se centran, entre otras, en las condiciones materiales, de la geopolítica, del desarrollo desde el punto de vista de las ventajas comparativas y competitivas así como de las simetrías, que aportan un cúmulo de información para entender el tema de la integración. Sobre este aspecto es obvio señalar que la concepción que sobre el desarrollo económico tengan Estados Unidos y América Latina se convierte en un elemento de la mayor importancia.

Dadas las condiciones mundiales, dadas las condiciones de asimetría internacional, en términos de incentivos, ¿qué pueden buscar Estados Unidos y América Latina desde el punto de vista de la cooperación en el contexto regional?

El planteamiento central es que se están repitiendo las viejas actitudes ya mencionadas, en consecuencia, la principal interrogante es, en primer lugar, qué es Estados Unidos como país en este momento porque ambas escuelas citadas hablan de una América Latina homogénea y ya hay demasiados estudios que constatan no sólo que ésta no es homogénea sino que además es diferente en cuanto a la manera como se deben abordar las relaciones con Estados Unidos: desde las posturas más radicales en contra hasta las más favorables a la integración hemisférica.

¿Cuáles son entonces los problemas que en este momento ocupan a Estados Unidos en relación con América Latina?

Primero, las limitaciones del juego democrático en relación con la América Latina que se visualizaba cuando fue planteada la Iniciativa para las Américas o el NAFTA. Una concepción que le hizo mucho daño a la posibilidad de consolidación de los partidos democráticos de centro en América Latina y que consiguió más bien la instauración de gobiernos semidemocráticos (de acuerdo con la concepción estadounidense) que han puesto el énfasis en la limitación al desarrollo de la actividad privada, en particular a las inversiones estadounidenses. Es una concepción centrada en la diversificación de los mercados que ha llevado a la interrupción de un consenso hemisférico, y dentro de ese marco es fundamental para Estados Unidos el tema de la seguridad del abastecimiento petrolero y —en sentido más amplio— el suministro energético.

Estados Unidos en este momento lo que está consiguiendo no es solamente una división en América Latina en el marco de la integración sino también que se fije una posición anti imperialista que está afectando esa relación.

Del mismo modo es importante plantearse qué está haciendo América Latina en relación con temas mundiales. A este respecto al observar la agenda internacional de América Latina que ha conseguido una proyección de carácter mundial (Venezuela, México, Brasil,

Argentina, Chile) destaca que, en cierta medida, está tomando posiciones distintas a Estados Unidos en temas como, entre otros, el Medio Oriente.

Desde nuestra perspectiva este es un marco en el que se inscribe de manera muy particular la relación Estados Unidos/Venezuela, muy relevante desde el punto de vista conceptual, tanto por trayectoria histórica como por las vinculaciones que se proyectaron a nivel regional (simbolizadas en la imagen de socio confiable y seguro) así como también en relación con la promoción del tema de la democracia.

Como se sabe, esa relación tradicionalmente muy fluida ha sufrido un cambio importante porque ya no sólo aparecen diferencias de naturaleza táctica sino grandes problemas estratégicos entre los cuales están la concepción del desarrollo, la de las relaciones internacionales, la del papel que puede jugar Estados Unidos tanto dentro del marco regional como dentro del concepto de "revolución", y una serie de elementos que también, con la contribución de Estados Unidos, crean los vínculos que en esas concepciones se establecen con los temas de narcotráfico, migraciones y derechos humanos, los cuales hacen mucho más compleja la nueva agenda entre Estados Unidos y Venezuela, convirtiéndola en un caso de estudio para identificar los nuevos lineamientos, procesos y discusiones que se dan entre los dos países.

Por ejemplo, desde la óptica de Estados Unidos, la visión predominante —tanto en el sector republicano como en el demócrata— es que Venezuela tiene que seguir siendo un país democrático¹. Sin embargo, este tema sobre su carácter democrático refiere a factores que deben ser tomados en consideración como son los factores internos que de alguna manera conspiran en Venezuela contra el desenvolvimiento de la democracia así como el tema de la injerencia, en la medida en que se debe aclarar si Venezuela ocupa o no un lugar importante en la conformación de regímenes que tienen diferencias con Estados Unidos en el momento actual. Aparte, en cuanto a la integración específicamente económica y comercial, Venezuela plantea la iniciativa del ALBA frente al ALCA y los más recientes tratados de libre comercio².

En resumen: los matices y las singularidades de las distintas aproximaciones en el desarrollo de la relación Estados Unidos/América Latina han tenido en su momento su repercusión y sus por qué. Con el caso venezolano estamos entrando en una discusión distinta y de mucha importancia en relación a cómo debe abordar Estados Unidos el tema del regionalismo.

Para muchos países de América Latina, en este momento, Estados Unidos debe estar fuera de todos los esfuerzos de carácter regional (es decir, la integración debe hacerse sin Estados Unidos), y para otros países la integración debe tratarse en un marco donde la parti-

1. Sobre este punto habría que discutir de qué democracia se trata porque hoy Venezuela ofrece un "paquete" ideológico que no sólo distorsiona la visión de democracia de Estados Unidos (integración, comercio, etc.), sino que el gobierno de Venezuela intenta imponerlo como modelo para el resto de América Latina.

2. Una "pieza de oro" para ilustrar estas diferencias se puede encontrar en las declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela: "Las prioridades en las que tenemos puesta toda nuestra energía y toda nuestra fuerza son la consolidación del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) y el fortalecimiento de UNASUR (Unión de Naciones del Sur)", declaración del ministro al canal estatal Venezolana de Televisión, recogida por el vespertino El Mundo en su edición del miércoles 09/05/07.

cipación de Estados Unidos tiene distintos grados pues para algunos es muy estrecha (como lo plantean ciertos países centroamericanos y los distintos procesos de TLC) y para otros debe ser mucho más laxa, como lo está planteando Brasil.

En todo caso se trata de un momento en el que los jugadores están actuando con la mira puesta en un capítulo ulterior que dependerá del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en el que, desde nuestra perspectiva, se están cifrando muchas esperanzas en la posibilidad de victoria de un candidato demócrata.

José Raúl Perales

Partiendo del estudio de caso de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, se destaca que históricamente esas relaciones se han podido identificar como de “bajo perfil” desde el punto de vista de la seguridad, estabilidad, confiabilidad y cierta sintonía durante mucho tiempo en términos de relaciones internacionales. Sin embargo, para entender dónde se encuentra la temática que marca esas relaciones en el momento actual es preciso comenzar por indagar en algunas premisas que subyacen los planteamientos de Carlos Romero:

— Qué peso tienen las estrategias ideológicas entre Estados Unidos y Venezuela en el funcionamiento de la relación bilateral³.

— Qué peso tienen esas diferencias en la forma en que Estados Unidos construye y articula sus relaciones hacia América Latina. A este respecto, Estados Unidos ha asumido en gran medida una política de no intromisión, posición que se hizo muy evidente en el caso de los procesos electorales (excepto en el caso de Nicaragua) que se celebraron en distintos países de la región durante 2006, un hecho que es importante destacar si se compara con la actitud asumida por ese país anteriormente. En esa misma línea destaca la reacción a la política de Evo Morales en Bolivia donde se ha hecho muy evidente la postura de no intromisión⁴.

También llaman mucho la atención las divergencias internas en el gobierno respecto de las relaciones con América Latina. En Washington es común ver el redimensionamiento político y la postura estadounidense sobre el precio a pagar por el abandono. La pregunta que se suscita es qué puede hacer que Estados Unidos se vuelva hacia América Latina, y es ahí donde aparecen las diferencias. Para el poder Ejecutivo, se trata de una agenda comercial que en este momento está marcada por la ratificación de los TLC, además del elemento estratégico signado por el tema energético. En este sentido, no se trata tanto del tema petrolero como del bioenergético, y es muy importante entender ese cambio en la política de Estados Unidos. Por otra parte, para el Congreso parece tratarse más bien de una agenda económica

3. Hablo de funcionamiento y no de desarrollo porque es posible que —considerando la divergencia de metas y el ejercicio de la política exterior entre Estados Unidos y Venezuela— no haya en el futuro acercamiento o fortalecimiento de esos vínculos.

4. Mirándolo “desde dentro” de Estados Unidos me refiero sobre todo al Departamento de Estado —el formulador de esas políticas hacia América Latina— y por ejemplo el cambio notable que se produjo como consecuencia de un cambio de funcionario cuando fue sustituido Roger Noriega por Thomas Shannon.

que combina el desarrollo del comercio con una agenda social. Llama la atención que los dos temas más importantes de la agenda latinoamericana en Washington, que son migración y comercio, no están ligados a Venezuela. No quiere decir que Venezuela y el presidente Chávez no tengan importancia para Washington sino más bien que se trata como un asunto bilateral. Pero también llama la atención la confluencia de los desencuentros y la forma como éstos se expresan en el ejercicio de sus relaciones exteriores. Frecuentemente se utiliza la palabra tolerar, pero también surge la pregunta de hasta cuándo va a tolerar Estados Unidos algún tipo de divergencia con América Latina. Y podríamos entonces preguntarnos: ¿qué significa “tolerar” en términos de los desarrollos más recientes?

En conclusión, es importante destacar que, como resultado de las próximas elecciones en las cuales podría pasarse de una administración republicana a una demócrata, hay pocas probabilidades de un cambio significativo de la política de Estados Unidos hacia América Latina. En Estados Unidos los intereses nacionales privan sobre los intereses partidistas. Cambian los métodos pero no necesariamente cambian los fines. Lo que los demócratas buscan, que es el acercamiento multilateral en sus relaciones exteriores, guarda muy poca relación con América Latina, lo que lleva entonces a preguntar cuáles podrían ser los diferentes instrumentos a desarrollar por parte de los demócratas para la concreción de ese cambio.

También vale la pena destacar los últimos resultados de Latinobarómetro sobre las percepciones que tienen los latinoamericanos acerca de la integración. Según los resultados de la encuesta, los latinoamericanos estiman que la integración es sumamente importante pero no se confía realmente en los otros países, ninguno ve a los otros países como socios confiables.

Arlene Tickner

A pesar de que estamos hablando de integración llama la atención que no se ha mencionado la palabra seguridad por lo que presento una contrahipótesis, y es que el papel de Estados Unidos en la región ha tenido efectos desintegradores tanto a nivel hemisférico como en el ámbito de las sub-regiones. Esta idea puede ser desarrollada alrededor de dos ejes. Primero, los Estados Unidos y, en segundo término, los otros países de la región y cómo estos también solicitan y articulan una relación con Estados Unidos que no parece particularmente propicia para consolidar relaciones más cooperativas entre ellos. Cabe aclarar, desde luego, que se trata de un análisis sesgado por la naturaleza de mi trabajo en Colombia, país cuya agenda con Estados Unidos está permeada por algunos temas que curiosamente no están en el lente de la mirada venezolana —lo que también llama mucho la atención— por lo que hago esa salvedad antes de pasar al planteamiento concreto.

En el ámbito hemisférico la visión de Estados Unidos sobre el tema de seguridad contrasta con la de un grupo de países en la zona que ha empezado a ver la desigualdad y la informalidad, entre otros, como los problemas de fondo de la región y esto, en recientes foros sobre la seguridad hemisférica, se contradice con una visión si se quiere miope de Estados Unidos, que sigue girando en torno a los temas tradicionales. A nivel sub-regional esto

es mucho más grave —y se ve claramente en la región andina— justamente porque en las zonas de América Latina donde están en juego los intereses de seguridad más sensibles de Estados Unidos, se observa un efecto negativo, y aquí nos referimos, nuevamente desde una mirada colombiana, a temas como drogas, terrorismo, entre otros. En esa medida se puede afirmar que la imposición por parte de Estados Unidos de los temas, las visiones y estrategias propios han tendido a tergiversar las dinámicas locales y las interacciones propias en los temas de seguridad y ha propiciado lo que ha sido señalado como la “seguritización” de las agendas colectivas de algunas sub-regiones de América Latina.

Con la securitización nos estamos refiriendo a los efectos políticos que tiene identificar algo como “amenaza a la seguridad”. Básicamente, la securitización no sólo tiene el efecto de sobredimensionar algunos temas sino que también tiene el propósito político esencial de cerrar los espacios de debate público sobre algunos temas de seguridad y de legitimar la adopción de cualquier estrategia necesaria para enfrentar la supuesta amenaza, lo cual en muchos países de América Latina se ha prestado para adoptar medidas de excepción que no necesariamente son las mejores para enfrentar los problemas de seguridad de la zona.

En la región andina la securitización tiene un efecto negativo adicional y es que, en una zona donde se vive en inseguridad, los países perciben a sus vecinos como amenaza mas no como una zona afectada colectivamente por ciertas amenazas. Y justamente en esta zona de interés estratégico de Estados Unidos es donde la adopción de estrategias bilaterales **versus** las multilaterales tiene el efecto de socavar esfuerzos locales de cooperación y concertación. En este sentido, Estados Unidos suele relacionarse de tú a tú con sus contrapartes de la región no sólo en cuanto a temas de seguridad sino también en los de comercio. A pesar de ello, el esquema queda corto si se limita a la discusión de las políticas de ese país hacia América Latina y no se profundiza en las formas en que diversos países de la zona perciben a Estados Unidos e interactúan con él.

A este respecto, resulta útil mencionar las diferencias entre la región andina y Mercosur ya que son dos esquemas diferentes de inter-relacionamiento con Estados Unidos que valdría la pena poner sobre la mesa para ejemplificar que no sólo importan los temas en la agenda de Estados Unidos sino también la forma cómo los países de América Latina entablan su relación.

En la zona andina, lo que se ha llamado “intervención por invitación” —más evidente en el período de gobierno de Álvaro Uribe, cuando Colombia ha buscado articular su agenda de lucha antiterrorista con una relación que he llamado “especial” (así, entre comillas)— ha tenido efectos nocivos para los acuerdos de integración en el sentido de que los vecinos de Colombia seguramente no comparten el tipo de relación que ese país tiene con Estados Unidos y en gran medida sienten la creciente presencia militar de éste como una amenaza para su propia seguridad. Además de eso, si miramos el esquema de la lucha antidrogas, se trata de un tema que afecta a otros países, menos Venezuela. Por ejemplo, con el fin de que Washington pueda mantener los niveles de ayuda a Colombia, los demás países —Ecuador, Perú y Bolivia en este

caso— han visto reducida la ayuda que les llega de Estados Unidos y esto, en mi opinión, ha generado otra fuente más de sospecha mutua y de negativismo.

En Colombia hay sectores que perciben que al igual que Colombia interactúa con la zona andina a través de Estados Unidos en forma positiva (porque exhibe un “enamoramien-to” bastante desbordado), Venezuela también lo hace pero desde el otro polo y en forma negativa. En cualquiera de estos dos esquemas lo que se observa es que la inter-relación entre los países andinos se establece a través de Estados Unidos, bien de manera positiva o negativa, y esto ha dificultado bastante la adopción de esquemas más cooperativos entre los países de la sub-región. De manera que la política de Estados Unidos en vez de unir a los países tiende a dividirlos y a interponerse en los espacios comunes entre ellos.

Otro caso muy diferente es el de Mercosur. Lo que se observa en esa zona —y tal vez tiene que ver con muchos factores, entre ellos el hecho de que Estados Unidos no ve en juego los intereses neurálgicos de su seguridad, pero también porque el esquema de integración sub-regional está ahí más consolidado, con mayores niveles de institucionalización— es una perspectiva muy distinta. La interacción conjunta de los países de Mercosur en temas de seguridad (Haití, por ejemplo) constituye una forma distinta de ver su relación con Estados Unidos en el sentido de que estos países se han puesto de acuerdo en torno a esquemas colectivos con el fin de posicionarse colectivamente *vis-à-vis* Estados Unidos en vez de permitir que este país se constituya en una fuente de división entre ellos.

Si se retoma el tema del debate, los retos de la integración y el papel de Estados Unidos, éste es uno de los desafíos primordiales para algunas sub-regiones. Es decir, cómo superar el efecto de socavamiento de la integración que Estados Unidos históricamente ha tenido en temas como la seguridad y cómo tender a acordar esquemas cooperativos entre países sin que Estados Unidos sea el intermediario de esas relaciones.

II

La Alternativa Bolivariana para las Américas-ALBA

Edgardo Lander

Comentaristas: Félix Gerardo Arellano / Feijóo Colomine

Antes de entrar en el tema del ALBA cabe señalar que los debates centrales y las opciones en torno a los modelos de integración se dan en un contexto donde el continente —América Latina, sobre todo América del Sur— se ha sido transformado profundamente por la experiencia neoliberal. El neoliberalismo no ha sido sólo una política económica identificada con el Consenso de Washington sino que en los últimos 25-30 años ha tenido un impacto tan potente en la reorganización global de estas sociedades que ha alterado de manera profunda las estructuras productivas, ha debilitado la fuerza organizada de los sectores trabajadores, ha concentrado el ingreso, ha alterado las relaciones entre distintos sectores productivos, ha hecho más potentes los sectores ligados al mercado internacional ya debilitado, ha desindustrializado la mayoría de los países y los ha reprimarizado, con lo cual la integración y la articulación de las complementariedades en la economía se hace sumamente débil porque para los sectores marginales hay mayor interés en acceso a mercados internacionales que la posibilidad de complementación con ideas como las ligadas a la sustitución de importaciones. Esto se expresa muy claramente en muchos de los debates y las dificultades que confrontan los procesos de integración.

De igual forma, cabe señalar que no es posible pensar en dinámicas de las políticas internas fuera de su relación con los contextos internacionales, por consiguiente, los temas de la integración se han convertido necesariamente en temas políticos internos.

En la gama de opciones que se debaten hoy en relación con las formas de integrarse ante la estructura social que han dejado estos 30 años de neoliberalismo se puede encontrar desde las propuestas del ALCA y los TLC —las cuales se pueden identificar como de profundización, consolidación e incluso constitucionalización del tipo de reforma de libre mercado— como encontrar áreas en las cuales los proyectos de integración no intentan tanto profundizar como mantener el *statu quo*, el tipo de patrón productivo existente. A ese respecto Mercosur es un claro ejemplo, como lo son también las propuestas que se están planteando con la Unión Sudamericana de Naciones que no parece contener intención de transformaciones significativas. Por otra parte, están las propuestas que salen de la Asamblea de Movimiento de los Pueblos, o el ALBA, que parten de la idea de la necesidad de una transformación profunda que permita solucionar problemas de equidad y participación.

El ALBA aparece inicialmente colocado en el debate político como una propuesta declarativa, de política abstracta, que se sitúa en el imaginario de que es posible otro tipo de integración, más anclada en valores y opciones políticas que en contenidos concretos. Con el

ALBA se habla de procesos de integración, unión de los pueblos, solidaridad, de autonomía frente a los proyectos imperiales, de un proceso de integración que no puede estar centrado sobre lo económico y menos sobre lo mercantil, que tenga relaciones de política cultural y fortalecimiento de la relación entre los pueblos. Pero sobre todo aparece sin ambigüedades como una clara confrontación con el proyecto no sólo comercial sino también político y económico de Estados Unidos representado por el ALCA. Sin embargo, se puede distinguir una gama muy amplia de versiones del ALBA. A nombre del ALBA se dicen cosas muy diversas lo que permite ver cómo se van construyendo sus discursos.

En primer lugar, hay que identificar una diferencia entre las formulaciones iniciales, de carácter genérico, abstracto, declarativo, y lo que en los años más recientes se muestra en términos en acuerdos, proyectos de inversión, entre otros, en un proceso de aterrizaje hacia propuestas con contenidos más concretos.

Por otra parte, es útil establecer una distinción que permita identificar claramente diferencias y para eso se puede proponer hablar del ALBA en sentido amplio y del ALBA con sentido estricto. En sentido amplio, bajo el ALBA se cobija una amplia gama de propuestas diversas que corresponden a proyectos de política exterior del gobierno venezolano, que no son acuerdos entre Estados sino iniciativas del gobierno en algunos casos con municipios, en otros con otros gobiernos pero las cuales, si bien en el discurso de política exterior aparecen formuladas como ALBA, desde el punto de vista de las contrapartes son identificadas simplemente como actividades en algunos campos determinados. En un sentido estricto, se puede identificar el ALBA como un conjunto de acuerdos estrictamente concebidos como una política pública bajo la denominación de ALBA y que se terminan negociando con los países con los cuales el gobierno venezolano en los últimos tiempos ha tenido afinidades mayores, como Bolivia primero y, más recientemente, Nicaragua.

Hay otro deslinde necesario para entender por qué el discurso se muestra tan disperso, y es que se trata de interpretaciones directas que han hecho los organismos públicos venezolanos relacionados con los organismos internacionales y de comercio internacional. Por lo tanto, se encuentran diferentes perspectivas, desde textos donde el ALBA aparece como contrapartida del ALCA, como una especie de patrón de integración que sirve más o menos para los mismos asuntos pero con criterios diferentes, y una visión más de proceso, más política, más de identificar como ALBA el conjunto de iniciativas que el gobierno venezolano impulsa en relación al continente, entendiendo en el camino que se trata de relaciones cambiantes que en unos casos pueden tener carácter de apoyo a principios, en otro caso son acuerdos, en otros financiamiento para políticas o iniciativas de cooperación.

Entendido el tema del ALBA en sentido laxo, hay un conjunto de iniciativas muy importantes en estos últimos años, muchas de las cuales tienen que ver directamente con las políticas exteriores que se asientan en los recursos energéticos. Por ejemplo, la experiencia de PetroCaribe, las condiciones de suministro, las formas de pago, los bajos intereses e incluso un fondo especial derivado del proyecto para el financiamiento de proyectos sociales es —des-

de el punto de vista del gobierno venezolano— parte del ALBA. De igual modo, refinerías en Paraguay, Uruguay, Argentina, la de Pernambuco en Brasil, son declaradas como parte de la integración energética pensada como iniciativa del ALBA, aunque desde el punto de vista de los gobiernos de esos países la palabra ALBA no aparezca en ninguna parte.

También como parte del cuestionamiento al patrón monopolístico corporativo de las comunicaciones —al hecho de que en nuestros pueblos nos enteremos de lo que acontece por la vía de CNN— surge TeleSur como una propuesta comunicacional cultural alternativa que es identificada como parte del ALBA, independientemente de la forma en que es asumida por las otras partes. Lo mismo ocurre con la política en el terreno financiero que plantea la creación del Banco del Sur; todos estos son aspectos que corresponden a una intencionalidad global de política de un modelo alternativo de integración de Venezuela pero no de una negociación que requiera que la contraparte asuma que está incorporándose a algo llamado ALBA.

En un sentido estricto, por consiguiente más acotado, sí existen acuerdos. En 2004, después del referendo revocatorio, se renegocia el Acuerdo de Cooperación entre Cuba y Venezuela del año 2000. A partir de allí se concreta el primer acuerdo propiamente ALBA de colaboración entre Venezuela y Cuba, en el cual se da expresión a ese conjunto de criterios que es el acuerdo de colaboración mercantil que permite cambiar petróleo por médicos, por ejemplo, en una concepción de integración y colaboración que se expresa en términos y planos totalmente diferentes a los tradicionales. En abril 2006, después de la elección de Evo Morales, se firma un acuerdo en el cual Bolivia ingresa al ALBA, y más recientemente, en enero de 2007, Nicaragua adhiere a los convenios, de manera que ya hay una formalización por parte de estos cuatro países en cuanto a su participación en el ALBA.

Es interesante el hecho de que el ALBA no es visto como una alternativa que se enfrenta a otras modalidades de negociación y de integración. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, no parece haber —por el momento al menos— contradicción entre esto y la firma de los TLC. Igual ocurre en el caso de Venezuela y su pertenencia al Mercosur.

Por otro lado, las redes sociales de resistencia al ALCA vieron la aparición del ALBA con relativa desconfianza por dos razones. La primera, porque les quitaba la iniciativa respecto de lo que venían planteando a través de la Alianza Social Continental que lleva años hilando fino alrededor de la propuesta de la Alternativa para las Américas, trabajando muy cuidadosamente desde las bases. No obstante, esto ha ido cambiando en el tiempo y ya recientemente las organizaciones sociales del continente, que vienen enfrentándose al ALCA, asumen el ALBA como parte de sus banderas de lucha.

La segunda es el ALBA del petróleo, obviamente la fortaleza principal de la capacidad de incidencia que ha tenido el ALBA tanto desde el punto de vista político y de apoyo financiero como desde el punto de vista del aporte a la solución de las carencias energéticas de los otros países con los que se está trabajando. Sin embargo, y simultáneamente, esta extraordinaria dependencia del petróleo es una fuente de debilidad. Por un lado, en el sentido de reforzar el patrón petrolero de concentración de la economía venezolana. Por el otro, por

lo relacionado con el problema básico de que en los debates sobre modelos alternativos en el mundo se imponga en América Latina la necesidad de un modelo productivo energético totalmente diferente al patrón depredador que está conduciendo de manera acelerada a la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta tierra.

Hay que ver entonces hasta qué punto es posible que un modelo alternativo —no sólo de integración, sino de proyecto de vida para el continente— pueda tener como piso algo llamado “socialismo petrolero”.

Félix Gerardo Arellano

Tengo importantes coincidencias con los planteamientos del profesor Lander, entre ellas la opinión de que el ALBA se proyecta como un esquema en teoría novedoso como replanteamiento de los valores en la temática de las relaciones internacionales, tema que en general ha sido relegado en las disciplinas sociales y que en las relaciones internacionales se ha tratado con un poco de mayor rigor por el peso del cientificismo. En alguna medida también el ALBA aparecía como novedoso en cuanto al lenguaje transgubernamental que quiere proyectar participación de los movimientos sociales, presencia en las Cumbres de la Alianza Social Continental y otros esquemas alternativos. En este sentido, en un plano académico, diría que estamos frente a la construcción de un lenguaje de cooperación más que de la idea de superación de la institucionalización que los regímenes anteriores han dejado, además del tema ético y de los valores dentro de la corriente institucionalista.

Sin embargo, este proceso nace improvisado, nace ambiguo, altruista, cooperativo, y ha tenido más o menos una evolución en la que haciendo segundas lecturas interpretativas, des-construcciones de lo que se está viendo, surgen preocupaciones serias sobre lo que progresivamente el ALBA está transmitiendo porque, eso que fue su primera Cumbre (la quinta, para otros), ha dado señales duras para la sociedad latinoamericana y para el mundo en general. Parece que una de las potenciales tendencias del ALBA —como es la de reforzar el principio de la cohesión— resulta contradictoria en términos de generar una fisura más en la integración latinoamericana. En el escenario de dispersión de neoliberalismo que ha afectado el funcionamiento de los procesos de integración, el ALBA parecería que viene a exacerbar contradicciones en la medida en que transmite una tendencia de exclusión y de homogeneización en el lenguaje que nos gustaría fuera superada dentro de la región latinoamericana. Parecería que ser miembro del ALBA supone tener unos valores comunes, mientras que dentro de las relaciones internacionales lo evidente es la heterogeneidad y su gran reto es cómo construir gobernabilidad dentro de la diversidad, cómo construir en América Latina un proyecto de convivencia, de crecimiento, con valores distintos.

El ALBA no parece transmitir ese respeto a la coexistencia, a la convivencia, a la divergencia, al disenso, a los valores contradictorios. El peso hegemónico que en este momento juega Venezuela por el tema petrolero que se ha hecho sentir en casi todos los acuerdos que se han adoptado transmite otra señal negativa porque reproduce el verticalismo que se ha

vivido en la integración latinoamericana cuando todo tiende a indicar que los gobiernos son los que deciden y no aparece muy clara cuál es la verdadera contribución de los movimientos sociales alternativos en la construcción de los diseños y/o en la transformación de las reglas. De tal manera que en este ambiente de homogeneización de valores y de verticalismo se podría afirmar que la democracia y la participación no ganan.

Hay otro elemento que luce contradictorio dentro de la presentación del ALBA y es el lenguaje que sataniza el libre comercio. La contradicción es que el ALBA sataniza el libre comercio pero en buena medida se construye sobre la base del libre comercio. Hay libre comercio con Bolivia a partir de acuerdos que en sus orígenes se habían negociado en el marco de la CAN, hay acuerdos comerciales suscritos entre Venezuela y Cuba en el marco de la ALADI que han sido la base para seguir creciendo. Es cierto que ha habido en el tiempo inequidad en las relaciones comerciales, por eso hay que hablar de reingeniería del sistema de integración y del tema comercial, y sobre este punto Mercosur no es precisamente el mejor ejemplo pues, para muchos analistas, se trata del esquema más neoliberal que existe hoy en el mundo en materia de integración.

En el plano teórico el esquema más equitativo es el de la Comunidad Andina. Obviamente, existe desconfianza, pero si se buscan mecanismos de reingeniería comercial para no satanizar el comercio, para hacer eficiente el comercio en términos de bienestar, hay que hablar, entre otros, de mecanismos de salvaguardia y en esto la CAN es el mejor ejemplo teórico del planeta. La CAN cuenta con seis mecanismos de salvaguardia. Se podrá decir "pura teoría", pero es preferible tener mecanismos de prevención a no tener nada. Desde esta perspectiva, los efectos vividos en Argentina como consecuencia de la devaluación monetaria en Brasil hubieran sido mejor administrados si el Tratado de Asunción hubiera contemplado mecanismos de salvaguardia por devaluación monetaria.

Desde un punto de vista personal, la preocupación mayor es que el ALBA pareciera reproducir las perversidades que América Latina ha vivido en materia de integración, a saber: verticalismo, no democratización, no transparencia, decisiones tomadas desde arriba, con el añadido de un elemento más duro que no era tan evidente anteriormente y que es la necesidad de tener una política común, un lenguaje homogéneo común, para poder participar.

Finalmente, esta situación retrotrae a los estudiosos de las relaciones internacionales a una re-edición de la guerra fría a través del lenguaje del ALBA. Ello es peligroso ya que América Latina necesita transformaciones profundas que enfrenten los problemas de la inequidad, de las asimetrías generadas por el liberalismo rampante, pero estas no pueden ir acompañadas por un lenguaje de conflicto permanente, de violencia y de exclusión.

Feijóo Colomine

Primeramente es necesario referirse a las doctrinas. La Doctrina Monroe, la que se enuncia en 1823 con el presidente James Monroe ante la posibilidad de restauración monárquica en Europa, que luego se mantiene en el tiempo y se le añade el "Corolario Roosevelt" en

1904, cuando el presidente Roosevelt, como reacción ante la Revolución Mexicana, planteó que “de ahora en adelante las relaciones de Estados Unidos con los países sudamericanos serán sobre la base de la lealtad de ellos para con nosotros”. Ello supuso una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a lo largo de todo el siglo XX, con base en una tremenda discriminación política “posicional” de Estados Unidos, sobre todo persiguiendo a los gobiernos de izquierda. Esto se expresó de una manera muy pragmática en manifestaciones concretas como la de la Conferencia Interamericana de 1953 que propuso una condena al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, lo que condujo a que poco tiempo después Castillo Armas derrocará a Arbenz en 1954 con apoyo militar norteamericano.

Más tarde, hablando de doctrina, en los años sesenta, surgió la Doctrina Betancourt, efímera, básicamente concebida para condenar a Cuba porque no había realizado elecciones, un elemento latinoamericano de adhesión a la democracia representativa de acuerdo con la cual el conjunto de los países democráticos del continente se comprometía a no reconocer a los gobiernos *de facto*⁵.

En todos estos procesos ha habido un hilo conductor. Las oligarquías nacionales que emergieron después de la Colonia presentaban una gran desventaja con respecto al proceso de independencia vivido en Estados Unidos porque los españoles, huyendo de los ejércitos independentistas, destruyeron, quemaron, decretaron “tierra arrasada”, y a eso se agregó otro jinete del Apocalipsis —las enfermedades—, particularmente la malaria y la fiebre amarilla. Distinto a lo que ocurrió en Estados Unidos que desde 1776 creció como una nación opulenta, comercial, que marcó una gran distancia tecnológica y comunicacional respecto de América Latina.

Hoy ese escenario es una edición corregida y aumentada. Los países latinoamericanos exhiben los peores indicadores de pobreza en el hemisferio, indicadores que podemos sintetizar en que mientras el ingreso per cápita de Estados Unidos se sitúa en alrededor de 43 mil millones de dólares, en América Latina el promedio es de 7 mil dólares y eso de por sí establece una gran desigualdad para cualquier tipo de proceso de integración. Si el proceso de integración viene desde Estados Unidos hacia América, prácticamente 200 años de historia demuestran su ineficacia como mecanismo de integración.

En este momento, en Costa Rica, el presidente Arias convoca un plebiscito —una simple manipulación electoral— para determinar si se firma o no el TLC, mediante mecanismos fraudulentos para impedir que la izquierda siga tomando el poder en el continente. Una izquierda conformada por pueblos divididos idiomáticamente, como es el caso de los idiomas indígenas⁶; esa es la gente que siempre estuvo excluida porque la oligarquía era la que participaba en los acuerdos. Son los grandes grupos económicos poseedores de las riquezas que existen en estos países los que acceden a esos procesos de intercambio y de comercio.

5. Más tarde los gobiernos se confabularon para acabar con la Doctrina Betancourt que en la práctica sólo sirvió para expulsar a Cuba del sistema interamericano en 1962.

6. En América Latina la mitad de la población habla 400 idiomas, sólo en Venezuela hay 32 idiomas indígenas reconocidos constitucionalmente.

Esa es la partida de nacimiento del ALBA. ¿Nebulosa al principio? Sí, porque fue una reacción del presidente Chávez ante una cumbre presidencial que luego comenzó a labrarse. No es que fuera una propuesta improvisada, tenía sustentación en la historia y se trata de un paradigma político propuesto por la izquierda latinoamericana. Ningún proceso de integración política, económica, social puede ser químicamente puro. Es absurdo pretender que en geopolítica internacional no se puedan manejar las políticas y los paradigmas ideológicos.

III

Impactos del conflicto haitiano sobre la integración caribeña

Manuel Carbonell

Comentaristas: *Elías Daniels / Antonio Romero*

Primeramente es necesario señalar que este tema ha sido insuficientemente tratado en la comunidad académica internacional. Resulta angustioso y preocupante constatar la casi total ausencia de investigaciones realmente científicas —es decir, alejadas de la especulación social, política o histórica— dedicadas a este conflicto que, sin lugar a dudas, junto con el colombiano —el preferido de los investigadores— constituyen dos de los principales obstáculos a superar para alcanzar la deseada meta: la necesaria integración de los suramericanos. Salvo excepciones, la mayoría de los estudios sobre integración se concentran por separado en las causas, en las consecuencias, o intentan promover recetas copiadas de otras regiones bien alejadas de la latinoamericana y caribeña y que no se ajustan a la realidad aunque pudieran servir de referencia. En otras palabras, se carece de integralidad en la visión regional. Lamentablemente, sucede que para este caso la práctica política cotidiana se adelanta a la academia, cuando debería ser lo contrario.

Respecto a un marco conceptual de referencia, los procesos de integración en el Gran Caribe poseen características propias que los distinguen de otros similares que transcurren a la par en nuestro continente. Pueden observarse a veces diferencias difusas, otras más o menos claras entre el Caribe insular anglófono, el francófono, el hispano y los países centroamericanos que forman parte por derecho propio, histórico y geográfico de la gran cuenca caribeña. ¿Llegan estas diferencias a niveles tales que propicien la fragmentación? Pienso realmente que no. Hay más de común y de complementariedad que elementos desintegradores y asimetrías. El concepto mismo de integración, a pesar de la enorme cantidad de información generada, mantiene elementos de ambigüedad. De todos, técnicamente, en el Centro de Estudios e Información de la Defensa existe la inclinación por la concepción desarrollada por Carlos Murillo Zamora⁷, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien expresa que “en definitiva, la integración regional se refiere al proceso de construcción gradual de un nuevo agente que expresa su identidad y procura alcanzar sus intereses en una dimensión espacial específica y, por tanto, distinta de la de los participantes. La integración regional implica una transferencia de potestades, deberes y responsabilidades de un agente a otro en una región específica, sin que ello implique la desaparición de los primeros. Esto se explica por el interés de los agentes para facilitar la consecución de sus intereses y reducir los riesgos en la toma de decisiones. Por lo tanto, se trata de un proceso gradual en el que hay

7. Carlos Murillo Zamora (2004) “Aproximación a los regímenes de integración regional”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, nº 8: www.reei.org.

avances y retrocesos y no una evolución lineal con pendiente positiva, porque no es un mecanismo coercitivo, sino un proceso de construcción social dinámico, condicionado por factores endógenos y exógenos" (p. 19).

Por otro lado, Ramón Torrent de la Universidad de Barcelona y coordinador del Observatorio para las Relaciones Europa-América Latina (OBREAL), enfatiza⁸ que ella no nace del vacío y que está condicionada por lo general por una diversidad de factores como la geografía, incluyendo la facilidad de comunicación, una precondition que no siempre se da incluso entre países vecinos; la población; la diferencia de tamaño entre los Estados, que no necesariamente crea obstáculos para el éxito de la integración —el tamaño de la economía y la renta per cápita también son importantes pero la experiencia demuestra que las diferencias en este aspecto son normales (aunque puede considerarse que no se cumple en el caso haitiano)—; la congruencia política, de mucho peso en varios casos; el origen y pasado común o un sentido de comunidad, el factor de mayor peso que subyace a la integración en el caso de la Comunidad del Caribe (CARICOM); la credibilidad y la eficacia del desarrollo que fundamenta la integración. Para el caso caribeño se podrían agregar la existencia de factores etnoculturales provocados por las migraciones desde África y el mestizaje entre distintos grupos humanos.

Varios autores, entre ellos el propio Torrent y el Banco Mundial, reconocen que la integración es una cuestión política cuyos objetivos más amplios son resumidos de la siguiente manera:

1. Seguridad intra y extra-regional.
2. Adquisición de poder de negociación en el marco del sistema mundial y multilateral.
3. Consolidación de reformas internas no sólo en las áreas que abarca cada proceso de integración económica regional sino también en otras áreas.

Todos estos postulados se personalizan en el proceso de integración caribeño y tienen estrecho vínculo con la situación conflictiva en Haití.

El marco conceptual presentado permite con facilidad abordar el conflicto haitiano y los impactos que ha tenido sobre la integración caribeña. Desde el punto de vista histórico, sus orígenes son bien conocidos e incluyen la larga cronología de tristes hechos basados y provocados por la bestial explotación, el robo de las riquezas naturales, las múltiples intervenciones militares que nada resolvieron, la corrupción y el abandono de la sociedad por sucesivos gobiernos que pusieron a este país al borde de la desintegración total. En tan temprana fecha como 1804, es el primer país que alcanza su independencia en América Latina y el segundo en América. Con 27.737 km² y una población superior a 8,3 millones de habitantes muestra parámetros que lo alejan significativamente del resto de los países del continente y que son el resultado de los agudos enfrentamientos y desastres allí vividos que impactaron e impactan con sus secuelas los procesos de integración caribeña.

8. Ramón Torrent (2006) "Un marco analítico para los procesos de integración regional", en: M. Rojas Aravena y L. G. Solís (coord.) *La integración latinoamericana: visiones regionales y sub-regionales*. FLACSO. Editorial Juricentro, San José de Costa Rica.

La estadística, como siempre, es más que elocuente. Algunas cifras permiten visualizar las enormes diferencias:

	Haití	América Latina y el Caribe (en promedio)
Índice de Desarrollo Humano	0,482	0,75
Índice Esperanza de Vida	0,45	0,79
Índice de Educación	0,5	0,87
Esperanza de vida al Nacer	52 años	72,2 años
PIB per cápita*	1.892 PPA/USD	7.964 PPA/USD

(*) Estimación estadística porque no hay manera de saber realmente en Haití cuál es el PIB.

Con tales desequilibrios el proceso de integración del país a la región se desacelera, por lo que se requiere de un tratamiento diferenciado. La secuencia consecutiva integradora conformada por comercio, unión aduanera, mercado común, unión monetaria y unión política resulta una vez más falsa e imposible de aplicar, como lo asevera también Torrent. De manera que es necesario aplicar medidas políticas urgentes de asistencia solidaria en áreas claves como la salud, la lucha contra el hambre, la educación, la energía y otras determinantes para cimentar definitivamente el Estado haitiano. Aunque la elección del señor René Préval como presidente de la República en febrero 2006 indican la vía hacia el fin de la crisis institucional, las causas y condiciones para el resurgimiento de la inestabilidad siguen teniendo campo abonado.

Reconociendo que existen otros impactos políticos que afectan la integración caribeña, se pueden postular como principales y trascendentales los siguientes:

1. La estabilidad del Estado haitiano y, por consiguiente, la solución definitiva de sus conflictos que influyen directamente en la capacidad para el establecimiento de un sistema sólido y estable de relaciones intergubernamentales y supranacionales en el Caribe. Si Haití fracasa totalmente, será imposible alcanzar en la región el poder de negociación suficiente para enfrentar los retos de un mundo globalizado. En otras palabras, de Haití depende el éxito de todos los esfuerzos integradores en esta región.
2. El conflicto en Haití ya produjo un impacto negativo en términos de seguridad regional. En la larga lista de preocupaciones militares en ese país se puede observar la utilización del concepto de seguridad humana, vinculado a la escuela de pensamiento crítico sobre seguridad, aún ambiguo y en desarrollo, que trasciende el Estado —supuestamente incapaz— y se centra en la persona, lo que tiene estrecha relación con las intervenciones humanitarias que constituyen medidas *ex post* y no *ex ante* al conflicto mismo. Tales acciones, lejos de favorecer la integración, la debilitan severamente.

Como conclusión, se puede señalar que existen soluciones al conflicto haitiano. Desde una perspectiva personal, el camino más seguro lo constituye la alternativa ALBA. Como recientemente expresó el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, el ALBA y los esquemas de integración en la región son procesos que se apoyan entre sí sin que unos traten de dominar a otros, son reflejo de la cooperación Sur-Sur, vienen a cooperar y a ayudar en el desarrollo del país, y esa es la mejor manera de expresar la solidaridad con Haití. A lo que agregó que si uno compara el ALBA con otros tratados y convenios de cooperación se puede ver la diferencia. Es la manera de entender que un país como Haití necesita tiempo para pagar su deuda y cumplir sus obligaciones contractuales.

Elías Daniels

Este comentario propone dejar la historia atrás, no porque no sea importante sino debido a que en estos momentos lo más importante es lo que está sucediendo en Haití después de esta segunda designación de René Prével en la Presidencia. La radiografía realizada del caso haitiano es acertada, pero es necesario hacer una distinción conceptual porque considero que el ALBA no es un proceso de integración pero si alguna aplicación tiene el ALBA es en el caso de Haití, porque en este país no hay otra posibilidad que no sea la de recibir. En el tiempo han existido muchas iniciativas de colaboración, como por ejemplo aquella venezolana para la CARICOM en el segundo período de Carlos Andrés Pérez, cuando se aprobó un sistema de preferencias sin esperar recompensas. Sin embargo, los procesos de integración no lograrán consolidarse mientras los países evadan la posibilidad de asumir que ello implica modificaciones en las relaciones de soberanía entre los Estados miembros. Unas modificaciones que, en el caso del ALBA, por ejemplo, deben adoptarse mediante decisiones para ceder de verdad o compartir aspectos hasta ahora de exclusiva competencia nacional, todo ello en procura de crear nuevos estadios y mayores espacios para mutuo beneficio. Por lo tanto, las referencias a una verdadera integración tienen que incluir el abordaje del tema de soberanía.

¿Dónde están las contradicciones de los procesos de integración? Están en el tapete y comienzan a verse. A mediados de abril de este año 2007 se realizó la Cumbre Energética de América del Sur seguida pocos días después por la Cumbre del ALBA. Como se señaló anteriormente, los modelos pueden coexistir, pero ¿hasta dónde cada país está verdaderamente dispuesto a llevar los procesos de integración? ¿Hay hipocresía? A veces se utiliza el lenguaje para ocultar lo que verdaderamente se piensa. Esto es quizás lo que en política da mayores dividendos.

Hay relaciones entre países que tienen importancia vital. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, además de la jerarquía de las relaciones de vecindad con Brasil y Colombia, es capital la relación con Trinidad y Tobago y, a lo mejor la relación con Haití no es vital. Sin embargo, este último debería ser incluido como parte de todos los acuerdos de integración en América Latina, sin exigirle contraprestación alguna, y acordar un programa de inversiones de largo plazo que le permita ser nuevamente un Estado responsable.

Con Brasil se tiene todo ese espacio geográfico que se extiende entre el río Amazonas y el Orinoco. Se hicieron esfuerzos tremendos por una integración donde sí había complementariedad, producto de una iniciativa que viene de alguien como Fernando Henrique Cardoso cuando en septiembre de 2000, en Brasilia, convocó la primera Cumbre Suramericana de Jefes de Estado, la única vez en el continente en que se reunieron los 12 Jefes de Estado. En ese momento, entre muchos temas, uno muy importante fue la Iniciativa para la Integración Suramericana, expresión de una visión pragmática de la integración, aunque con reconocidos errores. Es ahí donde se pone de manifiesto la tolerancia porque no se puede tratar de imponer un modelo preconcebido. Se trata de un ejemplo que plantea la diferencia con lo que ocurrió recientemente, cuando se convocó la Cumbre Presidencial en Cochabamba en diciembre de 2006. Después de la aprobación del Documento de Cochabamba, producto de una reflexión en la que afloraron contradicciones sustantivas y definiciones básicas como ¿qué es integración? ¿qué es cooperación, que es solidaridad?, unos meses después, en abril 2007, en Margarita, se cambiaron aspectos conceptuales tan importantes como pasar de la denominación Comunidad Sudamericana de Naciones a Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), lo que no es banal.

En este sentido, se puede concluir que desafortunadamente falta discusión y capacidad para escuchar; falta reflexión y tolerancia.

Antonio Romero⁹

En primer término, se hará referencia al entorno general del proceso de integración regional, particularizando la situación del Caribe, y en segundo término se destacará el tema central de esta discusión en torno al conflicto haitiano, la situación de Haití hoy en día y su impacto para la integración en el Caribe.

En cuanto al proceso de integración en el Caribe se puede señalar, en primer lugar, que se asiste a un asunto singular en el discurso y el accionar de la integración en toda América Latina y en especial en el Caribe. En la base de este replanteo y de las incertidumbres que afloran la clave es que la integración siempre tiene que verse como parte —y no como un todo— de un modelo económico y una estrategia de desarrollo económico. Como en la mayoría de los países de América Latina, con diferente signo ideológico, hay un proceso de revisión de los patrones tradicionales que han imperado durante los últimos 15-20 años, en el cual necesariamente se produce un replanteamiento de la estrategia integradora. En segundo lugar, porque al igual que sucedió con las políticas económicas, hay grandes insatisfacciones con los resultados obtenidos en términos de integración.

Así, cuando se analiza todo lo que se dice y todo lo que se discute respecto de la integración, destacaría seis ejes de la crítica:

9. Esta intervención se hace a título personal y no como director de Integración y Cooperación del SELA. Bajo ningún concepto se compromete la opinión de ninguno de los 28 Estados miembros de este organismo.

1. El proceso es extremadamente complejo y multidimensional. Hasta el año 2000 todas las experiencias fueron esencialmente "comercialistas", ni siquiera economicistas. Hay consenso en señalar que desde los años sesenta hasta finales de los noventa el proceso ha estado demasiado sesgado hacia lo comercial.
2. En términos generales, y sobre este punto también hay acuerdo, la integración ha sido construida sobre la base de relaciones intergubernamentales. Si bien es cierto que los gobiernos son actores fundamentales, hay otros actores que tienen que tener peso específico en la discusión y en los acuerdos que se tomen para que la integración tenga éxito.
3. Ha habido muy poca incorporación de agentes sociales, de los sindicatos, de empresarios, de las ONG, del mundo académico, de las universidades y de la sociedad civil latinoamericana en los emprendimientos de estos últimos 40 años.
4. También, como resultado de todo esto, en cada uno de los cuatro esquemas de integración más importantes de América Latina se ha producido un divorcio entre los compromisos fundamentales de integración y las políticas que después se aplican y que deberían dar cuerpo a esos compromisos.
5. Estos cuatro esquemas de integración, *strictu sensu* y hablando en términos tradicionales, ni siquiera han pasado del estadio de áreas de libre comercio. En ellos se observan mecanismos muy débiles de solución de controversias y pésimos mecanismos de coordinación macroeconómica que son esenciales para el desarrollo de la integración.
6. Existe poca eficacia en los mecanismos instrumentados para avanzar en la solución de los problemas de las asimetrías que son cruciales.

La CARICOM ha estado en un proceso de reacomodo, como ha pasado en los demás esquemas, sobre todo a partir del año 2000 cuando se avanza en la construcción de la llamada *Caribbean Single Market and Economy (CSME)* hacia la economía única en 2006 y el mercado único en 2008. Los principales objetivos de estos compromisos eran los de lograr el libre movimiento del capital y la fuerza de trabajo así como la regulación de las leyes que afectan el comercio. Pero es un hecho que no todos los Estados miembros participan de igual modo de estos esfuerzos aun cuando, a la altura de 2007, se pudiera decir que hay ciertos avances en términos de la consolidación de este mercado único del Caribe en el que en este momento participan 12 países.

¿Qué tiene esto que ver con Haití? En primer lugar, Haití se incorpora muy tardíamente como miembro pleno de la CARICOM, apenas en el año 2000. En 2004, como consecuencia de los sucesos que tienen lugar en ese país, muy complejos desde el punto de vista político, la CARICOM condena la violación de la cláusula democrática (que la tiene, igual que la OEA) y, por esa razón, los 14 países miembros, de acuerdo con la normativa legal vigente, no reconocen el gobierno de Latortue, suspenden a Haití de la CARICOM y toman distancia de la intervención humanitaria a pesar de que ésta es liderada por un grupo de países latinoamericanos. Esto crea una situación particular porque es el momento en el cual la CARICOM avanza hacia un estadio superior de integración pero, al mismo tiempo, Haití, que es el último país en entrar, es suspendido para sólo reincorporarse a partir de marzo de 2006, después de

la asunción al poder de René Préval, por lo que se encuentra actualmente en una situación distinta con respecto a la marcha de los demás países.

Destacaría de Haití que, paradójicamente, es el país de mayor población de toda la CARICOM y el tercero en términos de superficie total, solamente superado por Guyana y Surinam. También es el país que genera el mayor PIB total de la CARICOM. Por todo ello —y de acuerdo con cualquier tipo de análisis que se haga— Haití es la mayor economía de toda la CARICOM. Al mismo tiempo, es el país con más bajo nivel de desarrollo económico relativo y con el más bajo nivel de desarrollo humano.

La plena inserción de Haití a la CARICOM es un proceso en extremo complejo pero muy necesario porque no se puede hablar de fortalecimiento de la CARICOM si Haití no forma parte de ella, con pleno derecho y con plena integración, aunque con velocidades distintas. Es la nación más pobre de todas las que la integran, y la CARICOM ha tenido una particularidad histórica y es que las consideraciones de equidad, de solidaridad y por lo tanto de tratamiento de las asimetrías han estado presente en el discurso de los jefes de Estado de sus países miembros como en ningún otro de los sistemas de integración del continente. Por consiguiente, el tema de Haití y lo que pase con los compromisos en materia económica va a constituirse en algo así como un caso de estudio con respecto al manejo de las asimetrías en un proceso de integración en países en desarrollo.

En el caso de la CARICOM, para responder la interrogante principal de este seminario, hay integración y hay fragmentación. En cuanto a las críticas que se le pueden hacer al ALBA, a la Comunidad Suramericana de Naciones, ahora UNASUR, debe señalarse que son procesos en construcción por lo que no se les puede pedir concreción. Hasta ahora no percibo el ALBA con otras lógicas de integración distintas. Una cosa es mercado, otra comercio, otra libre comercio y parece que cuando se habla de esas tres cosas indistintamente se trastoca el sentido de la integración.

El centro del debate sobre la integración está presente también en los organismos internacionales, que en sus discusiones promueven todos los cuestionamientos que se hacen. Entre las preguntas más importantes están:

- ¿La integración implica necesariamente homogeneización política? Y esto remite a la necesidad de institucionalización.
- ¿Hasta qué punto pueden darse, en el caso particular de América Latina, principios básicos como respeto a la soberanía? Esto toca también la dimensión social de la integración.
- ¿Es posible la convergencia y articulación de los distintos esquemas para construir en el futuro las bases de unión latinoamericana y caribeña o con estos esquemas de integración y con estos proyectos estaremos cada día más desunidos?

Estas son las preguntas que están hoy en el centro del debate y se recogen incluso a nivel político.

IV

Geopolítica de la cuenca norte de América Latina: México y Centroamérica

Raúl Benítez

Comentaristas: *Demetrio Boersner / María Teresa Romero*

Este tema se ha venido trabajando desde hace algún tiempo en varios países como parte de un proyecto de investigación centrado en los temas de seguridad y defensa desarrollado por el Woodrow Wilson Center. Desde ese marco quizás resulte provocadora la afirmación inicial de que los ejes del debate sobre seguridad y defensa en México y Centroamérica son muy diferentes de los ejes de debate en los países andinos y Sudamérica, fundamentalmente porque en México y Centroamérica no hay debate sobre el ALCA y el ALBA.

En primer lugar, el ALCA nunca fue abrazado por México con entusiasmo porque desde 1994 tenía el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, identificado en castellano por sus siglas TLCAN), y según la reflexión de cualquier mexicano: “para qué tener el ALCA si tengo el NAFTA, con las cosas que yo ya gané en mi relación con Estados Unidos lo único que van a hacer los otros es competir conmigo”. Lo que explica que México siempre haya buscado espacios para bloquear el ALCA con el objetivo de proteger los términos de su tratado de libre comercio con Estados Unidos.

En segundo lugar, los centroamericanos —en los años noventa— fueron muy cercanos a Estados Unidos pero también tuvieron una dinámica muy importante de integración sub-regional donde el eje de sus propuestas giró en torno al SICA (Sistema de Integración Centroamericana) que completaba los acuerdos que habían nacido en los años sesenta y que para los noventa mostraba a todos los países centroamericanos muy unificados ideológicamente, lo que permite consolidar una integración más rápida y más entre sus élites económicas que a nivel político, hasta el punto de que en Centroamérica se habla de que ya no hay empresarios nacionales ya que el gran empresariado centroamericano es sub-regional. Existen casos emblemáticos que sirven como ejemplo. El de la línea aérea TACA, que hizo desaparecer las pequeñas líneas regionales (LACSA, COPA, entre otras) y hoy está compitiendo con LAN-Chile por los mercados. En el área del café se constituyó un conglomerado de empresarios multinacionales que son los que asumen la exportación; también los bancos están totalmente transnacionalizados. Uno de los pivotes de este género de operaciones es la economía salvadoreña que funciona muy bien como intermediaria con Estados Unidos debido a la dolarización del país. De manera que tampoco los centroamericanos hablan del ALCA.

Ahora se menciona el ALBA por el cambio de gobierno en Nicaragua pero ese país es la economía más frágil de la región. Los centroamericanos entienden que la cercanía que guarda ese país con el ALBA se establece para recibir las transacciones que están basadas en

la recepción de bienes a cambio de apoyo político. Los centroamericanos no lo ven como un jugador a su mismo nivel, los jugadores están en El Salvador, Costa Rica y, en menor medida, en Guatemala y en Honduras. Panamá es un caso aparte que tomará mucha relevancia si se concretan los planes de ampliación del canal y se abre la comunicación hacia China. De manera que los países centroamericanos no están en el debate ALCA/ALBA. Pero también hay que tener presente como una realidad que en el continente se ha fracturado el Consenso de Washington, lo que no significa un nuevo consenso, por lo que sólo se puede hablar de la existencia de consensos y alianzas que se orientan en múltiples direcciones.

Se está intentando construir un nuevo eje geopolítico anti Consenso de Washington sobre la base de que aquel se centraba en la promoción del libre comercio bajo el esquema político formal del juego de partidos. Sin embargo, la fractura del Consenso de Washington se da junto con un cambio en las tesis políticas latinoamericanas tradicionales relacionadas con la homogeneidad política que había en los años noventa que se ha orientado hacia la izquierda en muchos países. Pero en el caso de México y Centroamérica esto se observa sólo en el ámbito parlamentario, no en el de los gobiernos federales o centrales (por ejemplo, en El Salvador la izquierda tiene el control de la alcaldía de San Salvador desde hace muchísimo tiempo). Ciertamente, hay una nueva izquierda anti Consenso de Washington pero que no necesariamente tiene los mismos valores porque viene de países diferentes así como diversos son los intereses nacionales de manera que, si bien hay un desplazamiento político, eso no ha modificado las posturas hacia el exterior, lo que hace que Centroamérica y México sean jugadores mucho más cercanos a Estados Unidos que el resto de los países latinoamericanos.

Otro elemento a destacar es la ausencia de política de Estados Unidos hacia el hemisferio, excepto hacia Colombia que es el único país que recibe la atención de Washington. Estados Unidos es un país cuya política se puede entender al examinar el manejo de los presupuestos de asistencia y, en este marco, Colombia es el único país que recibe montos significativos de ayuda. También cerca de la mitad de los recursos de asistencia están en ese país, como señaló recientemente el presidente Bush a *The Washington Post*. Para los otros países lo que queda son residuos financieros que también se transforman en residuos de política. Esto es muy importante porque da pie a que se diga que, en realidad, Estados Unidos no es obstáculo para que se construyan alternativas distintas en América Latina. Al respecto, ¿cuál sería el riesgo futuro? Podría responderse que tal vez una nueva guerra fría en el hemisferio si se llegara a consolidar esa polaridad anti Consenso de Washington pero eso todavía tiene matices muy difusos.

En el caso, por ejemplo, de la relación México/Centroamérica, la política exterior de México gravita sobre dos ejes. Primero el de Norteamérica, sostenido principalmente por el TLCAN (hay que recordar que México concentra el 80% del comercio de toda América Latina hacia Estados Unidos, el 20% restante se reparte con todos los demás países). Segundo, porque todo lo que pueda decirse acerca de la relación comercial de Estados Unidos con América Latina está marcado por el TLCAN. Si se introducen otras variables, en Norteamérica hay una seguridad regional en construcción, que se ha visto complicada desde 2001 por los aconteci-

mientos del 11-S y las dificultades por parte de Estados Unidos para buscar apoyo a su política internacional de seguridad contra el terrorismo. México ha sido uno de los obstáculos para tratar de mantener su independencia de Estados Unidos en un ámbito en que podía haberla conservado sin afectar su política comercial con ese país.

Algunos países de Centroamérica siguen manteniendo, con recato, la doctrina de seguridad nacional, cooperativa o internacional. En este caso está además el tema de la seguridad colectiva participativa que tiene sus raíces en el consenso centroamericano de los noventa, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, entre ellos el Tratado Marco de Seguridad Democrática, en términos teóricos el tratado de seguridad cooperativa más avanzado del continente pero, en términos prácticos, letra muerta¹⁰. Igualmente, en esta sub-región hay un tema que no se trata en México ni en otros países de América del Sur y es que los Estados son muy “pragmáticos”. Son Estados que, con la excepción de Costa Rica, pueden estar en el límite de la definición de Estados fracasados, dado que son incapaces de controlar las áreas más importantes de la economía o del sistema político. Por ejemplo, las políticas económicas de los Estados prácticamente las manejan los grandes conglomerados empresariales. En este marco, hay unos Estados más “pragmáticos” que otros. El caso de Guatemala es considerado por todos los analistas como un Estado colapsado en sus estructuras políticas fundamentales, con el añadido más importante que es una llamada a los militares para que intervengan en el Estado para tratar de resolver el problema de la gobernabilidad. Estos son factores que alteran las relaciones pero no tienen nada que ver con el debate ALCA/ALBA.

Con estos elementos se evidencia que los temas de seguridad y las relaciones internacionales de los países centroamericanos tienen un carácter muy distinto a lo que se ha venido discutiendo en el marco de este seminario sobre temas de seguridad y cooperación referidos al ALCA y el ALBA en los trabajos que anteceden.

Una cosa muy importante que se observa en México y que podría trasladarse a otros países es la parálisis legislativa, con una política construida sobre el modelo de equilibrio perfecto de una carambola de tres bandas donde ninguno puede ganar y, por lo tanto, donde el Presidente tiene una capacidad de maniobra mínima. Esto significa que cuando se presentan conflictividades —por ejemplo, diferencias entre el expresidente Fox y el presidente Chávez— no se llega a nada porque cualquier cosa importante la detiene el legislativo. Eso también se observa en el caso de Costa Rica, o en el nicaragüense, donde se ideologizan los gobiernos para establecer sus relaciones internacionales.

En el eje México-Centroamérica otro tema fundamental en la relación con Estados Unidos es la migración el tema que mueve la agenda de Washington¹¹. En el caso de México, es una

10. Lo mismo ocurre con lo que considero en términos teóricos el segundo tratado de seguridad más importante, el Tratado de Seguridad y Defensa de la OEA (2003), que también en términos prácticos es letra muerta.

11. Además de México y Centroamérica, en cuanto al tema migración y la relación con Estados Unidos se pueden incluir también República Dominicana, Cuba, y en menor medida algunos países del Caribe y de América del Sur

frontera porosa en la que aparece una gran fricción por el tema migratorio. El problema mexicano es que no tiene una política alternativa para la migración, que Estados Unidos está pidiéndole, lo mismo que México le está pidiendo a Estados Unidos. De manera que ambos países se acusan y ambos tienen su parte de razón en el tema migratorio y su colofón seguridad.

En el caso centroamericano están agotados los Acuerdos Procesos de Paz (acuerdos básicos sobre democratización y desarme, entre otros) y eso es muy grave porque se ha producido un retroceso, por la debilidad del Estado y porque ha aparecido una descomposición social de nuevo tipo, el gran problema de Centroamérica: las maras rebasan los gobiernos. A ello hay que añadir una expulsión masiva de población. Los mexicanos en Estados Unidos son más que los centroamericanos pero en términos relativos (por el tamaño del país, tamaño de la economía, tamaño de la población) las expulsiones masivas de Centroamérica son mucho más significativas. Por ejemplo, las economías agrarias están totalmente desplomadas, desarticuladas, y paradójicamente los economistas centroamericanos señalan que lo único que puede salvar sus economías agrarias es el TLC con Estados Unidos para poder colocar sus productos agrícolas en ese país. Por lo que el TLC con Estados Unidos para los centroamericanos es un tema de seguridad nacional y regional como mecanismo para tratar de retener a la población y reactivar la economía. También, además del fracaso de los sistemas de inteligencia de todos los países, hay que destacar una incapacidad notable para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la remilitarización.

La polaridad pro/anti Consenso de Washington es un tema muy volátil, se ve en la región pero en unos países se expresa a nivel de gobiernos y en otros a nivel de la oposición. Su evolución dependerá de los virajes políticos y de cómo se muevan los gobiernos y se comporten en relación con el tema de la democracia representativa o del libre comercio. En México, en las elecciones de 2006, ese debate se dio y se decidió por menos de 1% de la votación, lo que quiere decir que cualquier pequeña fuerza política hubiera podido cambiar el balance político. Pero no fue así. En el caso centroamericano las fuerzas de izquierda ni siquiera tienen una importante presencia legislativa y, aunque esto no se puede subvalorar, lo que hay en los gobiernos centroamericanos —con excepción de Nicaragua— es una gran coalición empresarial sosteniendo los gobiernos¹².

Otro factor muy importante a tener en cuenta en el contexto centroamericano es cómo los hitos de la economía centroamericana se han visto golpeados por la naturaleza. El huracán Mitch destruyó la economía de Honduras que tardó cinco años en recuperarse. Son cosas que están fuera del control de los gobiernos pero también los desastres naturales en esta región son temas de seguridad, cosa que no ocurre en América del Sur.

como Ecuador y Colombia.

12. El caso nicaragüense se puede definir también en el mismo nivel porque el grupo de empresarios más ricos del país está incorporado a la familia presidencial de manera que ellos operan por sus propios intereses.

Para concluir, el eje de la relación México y Centroamérica con Estados Unidos no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. Nicaragua es jugador diplomático pero no es jugador empresarial y tampoco jugador político porque no hay un contexto favorable para mover la diplomacia y las relaciones internacionales que pueda inducir modificaciones en la sub-región como conjunto. Nicaragua puede cambiar internamente pero esos cambios no incidirán en la sub-región. Por el momento, al observar el conjunto de países latinoamericanos pueden hacerse diversas distinciones, entre ellas: Colombia, Perú y Chile que están muy definidos, así como también México y los países centroamericanos, donde no debería haber cambios en los próximos cinco años. Si ubicamos a Brasil y Uruguay en posiciones intermedias, dada la forma en que reaccionan ante la política exterior de Estados Unidos, ¿qué papel podrían jugar Venezuela, Bolivia y Argentina? No se puede dejar de señalar que el único presidente latinoamericano que ha tenido el honor de pisar la alfombra roja de la casa de campo del presidente Bush, es Lula.

María Teresa Romero

Es importante retomar el planteamiento sobre la especificidad de Centroamérica ya que hay varios factores que le son propios. En este marco también es necesario recordar que en los estudios de las relaciones internacionales, de la política internacional y de las políticas exteriores de cualquier región no se pueden hacer análisis en blanco y negro, hay que ver sobre todo la amplia gama de grises que contienen.

Si bien no se puede decir que haya un debate ALCA/ALBA en Centroamérica, sí lo hay de manera indirecta. En este momento esa región está alineada con lo que se ha identificado como el eje del Consenso de Washington, pero también puede considerarse que Centroamérica no escapa a la polarización que se vive en el resto del hemisferio porque ahora que ya prácticamente el ALCA no existe porque lo que hay es un ALCA fraccionado, distinto de la propuesta realizada por el presidente Clinton en 1994 con la Iniciativa para las Américas, hay en el tapete dos propuestas de integración. Por un lado, una propuesta más integradora de la mayoría de los países latinoamericanos, donde no se rechazan países sino que se involucran, a pesar de las diferencias, a través de la OEA, de la CAN, de Mercosur y, por el otro lado, una propuesta en la cual, para ser invitado, hay que tener algunas características específicas, una integración que en palabras del presidente Chávez es más “revolucionaria”.

Aun cuando Centroamérica está aparentemente alineada a esa forma de integración más tradicional, parecería estarse dando una fuerte competencia que permitiría también pensar que podrían llegar a ella los riesgos de esa guerra fría que se ha empezado a ver en América del Sur. Hay que acotar sobre este punto, por ejemplo, los esfuerzos que están haciendo México y Colombia —y también Estados Unidos aunque de manera más silenciosa— por renovar el Plan Puebla-Panamá y recordar que apenas en abril hubo en México una Cumbre muy importante en la cual se habló de llevar a la práctica todos los acuerdos contenidos en ese Plan. Por otra parte, cabe destacar igualmente los esfuerzos de diverso tipo y de variada

naturaleza que ha hecho el gobierno de Venezuela por tener influencia en Centroamérica, no solamente en Nicaragua, sino también en otros países de la región.

En Centroamérica, después de cumplirse 20 años de los Acuerdos de Esquipulas, aunque ha habido adelantos en materia de paz y de democratización, persisten muchas debilidades, no solamente de desarrollo, de pobreza, de seguridad, sino también problemas en los sistemas políticos mismos. Estos elementos plantean motivos de preocupación y ponen de relieve cómo están presentes influencias de estas dos tendencias de integración, lo cual obliga a considerar la importancia de Centroamérica para el fortalecimiento de una tendencia u otra.

Demetrio Boersner

Desde el año 2000 a esta fecha, en esta área de las Américas, se presenta en general una polarización entre dos posiciones. Por un lado, el enfoque que se expresa ya sea a través del ALCA, ya sea a través de una serie de tratados bilaterales de libre comercio o a través de esquemas sub-regionales de desarrollo conjunto como el Plan Puebla-Panamá, donde se encuentra una estrategia bi-regional movida por Estados Unidos y conveniente para sus intereses estratégicos. Del otro lado, se han venido conformando, a partir del año 2000, una serie de objeciones a la integración bi-regional y la reafirmación de un regionalismo latinoamericano de desarrollo autónomo. Este movimiento regionalista latinoamericano enfrentado al bi-regionalismo hemisférico tiene diversas facetas. Pareció en un momento dado que se iba a formar una especie de bloque único identificado con una ideología vagamente calificada de izquierda; se veía la posibilidad de que los gobiernos de Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, con el apoyo de Cuba, formarían un efectivo bloque de oposición a Estados Unidos y de alternativa latinoamericana al ALCA y al esquema bi-regional. Esta idea se está desvaneciendo en estos últimos tiempos, sobre todo cuando desde finales del año 2006 se están haciendo evidentes grandes divergencias en el seno de ese conjunto regionalista latinoamericano que se ha identificado como anti Consenso de Washington.

El anti Consenso de Washington de Brasil es muy moderado, muy racionalista, tiene muchos bemoles, y tiene por centro fundamental de sus preocupaciones el interés nacional de Brasil, incluida su clase empresarial. Del otro lado tenemos el enfoque venezolano, evidentemente político, eminentemente ideológico y, en su discurso, apasionado, radical y conflictivo en lo que se refiere a las relaciones con el Norte, con Estados Unidos, y su voluntad de repercutir sobre el mundo entero aliándose con fuerzas de cambio en el medio Oriente o donde quiera que estén. Ese enfoque radical está empezando a entrar en contradicción con el enfoque moderado, pragmático, brasileño.

Por otra parte, Estados Unidos está tomando un poco la contraofensiva. Puede considerarse que el reciente viaje del presidente Bush por América Latina no fue el gran fracaso que algunos comentaristas consideraron. Es verdad que durante años Estados Unidos —particularmente el gobierno del señor Bush— mantuvo una actitud negligente hacia América Latina. Por otro lado, es también cierto que el gobierno norteamericano se ha visto desde hace años

desacreditado ante la opinión pública mundial por sus propias acciones, entre ellas la desafortunada guerra de Irak. Todo esto ha causado un gran anti norteamericanismo en muchas partes del mundo de manera que cuando el presidente Bush emprendió su viaje a América Latina muchos pensaron que era muy tarde, que sería recibido con abucheos y no llegaría a ninguna parte. Pero no fue tan así. Su encuentro con el presidente Lula de Brasil, el acuerdo sobre el desarrollo del etanol, ese acuerdo energético tan importante que introduce un elemento nuevo y un nuevo obstáculo en la estrategia venezolana de utilizar el factor energético como arma estratégica mundial es muy relevante, así como es significativo el abrazo Lula-Bush primero en Brasilia y después en Camp David. Por otra parte, después de la visita de Bush a México, la iniciativa del presidente Calderón de dar un empuje al Plan Puebla-Panamá e impulsar en cierto modo el TLCAN hasta el istmo del Darién, donde enlaza con el Plan Colombia, es una contraofensiva que no deja de tener efectos muy importantes sobre todo si se considera que Estados Unidos sigue siendo el gran mercado para todo el mundo.

Así mismo, insisto en la debilidad del ALBA que todavía es un proyecto bastante vago, lleno de buenas intenciones todavía no instrumentado, no es una realidad que pueda comenzar a funcionar como alternativa frente a ningún otro esquema de integración. De modo que existen dos frentes, los dos llenos de contradicciones, ninguno con posibilidades inmediatas de avanzar y de ganar grandes sectores aunque objetivamente el frente del Pacífico tiene un poco más de posibilidades ya que la iniciativa norteamericana, mexicana, colombiana, después de todo tiene detrás a la principal potencia del mundo en lo económico. No se sabe si Estados Unidos será capaz de realizar con algún éxito una contraofensiva contra el cuestionamiento que viene del Sur, y eso dependerá en gran medida de la actuación de la oposición demócrata en el Congreso. Si el Partido Demócrata, en una forma nociva, miope y dañina para los propios intereses de su país, rechaza los tratados de libre comercio deseados por las élites de Colombia, de Perú y de otros países, le haría un enorme daño a la estrategia norteamericana, y no sólo a la republicana, porque esta estrategia fue iniciada por Clinton. En ese aspecto hay continuidad entre Clinton y Bush. Dependerá de que en Estados Unidos actúen demócratas y republicanos de común acuerdo. Si lo hacen, si los demócratas aceptan una especie de consenso nacional, no excluiría que en esta contienda el lado del Consenso de Washington coseche algunos éxitos. La posibilidad de un éxito del lado latinoamericano regionalista, autonomista, requeriría mayor unidad por parte de nuestros países, requeriría que Brasil y Venezuela volvieran a encontrar un lenguaje común o que, por lo menos, se acercasen un poco más en el estilo de sus planteamientos y en la estrategia mutua.

V

Crisis de la integración andina y perspectiva suramericana

Socorro Ramírez

Comentaristas: *Edgar Otálvora / Luis Fernando Fernández*

La Comunidad Andina (CAN) está viviendo una transición en la que se encuentran procesos de fragmentación pero también, simultáneamente, redefiniciones que le pueden reasignar un nuevo sentido y un nuevo papel a esa comunidad. El hecho de que predomine esa fragmentación o una redefinición que relance la integración no sólo andina sino sudamericana dependerá de alguna manera de que el tema energético y de infraestructura se oriente en la perspectiva de profundizar la integración regional.

La crisis andina no deriva de los momentos de firma reciente de los distintos tratados de libre comercio —algunos en entredicho, el colombiano en particular—. Es una crisis que se incubó tiempo atrás. La CAN vivió simultáneamente una tensión entre la apuesta por una integración multidimensional y el personalismo abierto para hacerle frente al mundo global, para regular las relaciones con Estados Unidos, el socio mayoritario de cada uno de los países andinos. Esa tensión generó desarrollos muy positivos en la apuesta por una integración multidimensional que ahora se ha satanizado. En realidad, la Comunidad Andina, como mecanismo, en casi cuatro décadas acumuló todo lo que debe enfrentar cualquier sistema de integración multidimensional. Porque el sistema económico no se basó sólo en lo comercial —y lo comercial, hay que subrayarlo, ahora es visto con desprecio— y los socios andinos son los que han permitido lo poco o mucho de industria que tiene la región. El componente comercial de la integración andina ha sido de manufactura, un comercio sobre todo intraindustrial, porque a Estados Unidos se le venden bienes primarios, y es lo que durante un buen período permitió a la región una dinámica económica importante.

En el período la CAN, además de lo comercial, hizo acopio de importantes desarrollos en temas ambientales, de biodiversidad, de desarrollo territorial, de integración y desarrollo fronterizo, en temas sociales e indígenas, una política migratoria, un esfuerzo de coordinación de política exterior, y lo más importante es que ha tenido instituciones supranacionales que han funcionado y que incluso si se evalúa su nivel de incumplimiento y se compara, por ejemplo, con las instituciones del Mercosur, han sido más eficientes.

Por otro lado, los países miembros, al mismo tiempo que estaban aportando a esa integración multidimensional, progresivamente fueron flexibilizando ese esquema. Los primeros fueron Venezuela y Colombia, que firmaron a mediados de los noventa el G-3, que introducía una apertura importante en los Acuerdos para tener un comportamiento homogéneo frente a terceros países. Pero luego, en 1996, Bolivia ingresó a Mercosur, luego lo hizo Perú, y así se fue llegando hasta la Decisión 598 que autorizó a Venezuela a ingresar al Mercosur como

miembro pleno y que facultó a Colombia, Ecuador y Perú a firmar distintos tratados de libre comercio. Es decir que esa simultánea apuesta por la integración profunda pero también la presión por buscar una inserción nada fácil en el mundo global ha hecho que de alguna manera se incubara un gran patrimonio pero que al mismo tiempo se fuera generando la crisis por la que hoy atraviesa la integración andina.

En un contexto de crisis en cada uno de los países andinos, en los que se viven serios problemas de gobernabilidad, sociales y políticos, se han producido además crisis tan agudas como la colombiana con el fenómeno de la violencia, que ha generado efectos en los países vecinos y con la que interactúan desde estos países distintas dinámicas fronterizas sin que haya habido capacidad de manejo cooperativo de esos temas transfronterizos articulados a flujos globales y a redes desterritorializadas que de alguna manera nutren el conflicto colombiano. En ese contexto, en los últimos dos años se ha asistido a una fragmentación aguda de la integración andina. Por una parte, por la firma de los tratados de libre comercio (TLC) por parte de Perú y Colombia, pero también por el retiro de Venezuela de la CAN que, si bien se hizo en momentos en que Perú, Colombia y Ecuador quisieron redefinir en particular el tema de propiedad intelectual para adaptarlo a las condiciones negociadas con Estados Unidos, también responde a una nueva propuesta de integración que va más allá de la propia dinámica andina y que se vincula con iniciativas ya discutidas.

Además de la fragmentación también se está asistiendo a efectos de redefinición. Después de la salida de Venezuela, los cuatro miembros que quedaron en la CAN han decidido permanecer en ella. Bolivia, cuando reemplazó a Venezuela en la presidencia de la secretaría rotativa, también dudó si se afiliaba como miembro pleno al Mercosur o si permanecía en la CAN y al respecto puede decirse que para Bolivia varios fueron los factores que incidieron para considerar su permanencia. Visto en una perspectiva global, Bolivia ha sido el primer beneficiario con el acuerdo sub-regional andino. Además, en la comunidad mantiene dos asuntos de gran importancia como lo son la resolución de su salida al Pacífico y el asunto igualmente importante del tema indígena, más fácil de resolver en el marco de la CAN que en el del Mercosur. Para Ecuador, su permanencia en la CAN también obedece a razones objetivas: Perú y Colombia tienen necesidad de un marco para tramitar esas relaciones complejas entre vecinos que comparten temas de seguridad e importantes asuntos migratorios e igualmente, a Colombia y a Perú se dirigen exportaciones distintas de las que Ecuador envía a Estados Unidos. También Perú, que en los últimos años se había mantenido un poco alejado, con la visita de Alan García a Bogotá decidió involucrarse un poco más y ha firmado recientemente un acuerdo para generar al interior de la CAN un mercado común. Por su parte Colombia, que ha sido el mayor exportador andino de bienes primarios que van a Estados Unidos, afectada por la confrontación armada requiere de un ámbito multilateral para procesar su vecindad con Ecuador, así como sus relaciones complejas con Bolivia al mismo tiempo que sus coincidencias cada vez mayores con Perú, todo lo cual va a permitir asistir a una CAN de varias velocidades y con temas distintos de involucramiento de sus países miembros.

Para materializar la decisión de permanecer en la CAN los cuatro países que quedaron resolvieron ajustar el Tribunal Andino al número de miembros plenos que hoy tiene la organización, además de buscar la prolongación de las preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos y redefinir los términos de una negociación con la Unión Europea para un acuerdo de asociación que incluye comercio, diálogo político y programas de cooperación. Así mismo, el Consejo Presidencial Andino de junio de 2006 reiteró —obviamente— las proclamas de siempre de la apuesta por la superación de las causas estructurales de la pobreza, el conflicto de las migraciones, entre otras, aunque esas decisiones no son suficientes para afirmar que la CAN tiene su panorama despejado. De hecho, la redefinición del Tribunal podría estar mostrando un retroceso de entes supranacionales hacia organismos intergubernamentales con representación de intereses nacionales. Sobre el Acuerdo con la Unión Europea hay discrepancias pues Bolivia sólo acepta un acuerdo de libre comercio de bienes pero no que se incluyan en él temas como propiedad intelectual, compras estatales e inversión, asuntos que los demás miembros de la CAN y la propia Unión Europea consideran imprescindibles.

El otro tema de la reunión de Presidentes, la apuesta para superar las causas estructurales del atraso de la región, señala que requerirán de un esfuerzo cooperativo. Esa redefinición de la CAN parece acompañarse con el retorno de Chile que, si bien lo hace en los mismos términos con los que participa en Mercosur —manteniendo su libertad económica y sin comprometerse con el arancel externo—, lo hace también por una razón política, así sea por la razón pragmática del acceso boliviano al mar, por lo que resolver el tema del Pacífico es de enorme significación y tiene implicaciones con Perú y Bolivia. Pero también el anuncio de México, que puede ser muy retórico, del acuerdo de cooperación con Ecuador, podría estar mostrando que la CAN está redefiniéndose como espacio de coordinación hacia el Pacífico y espacio de coordinación hacia Suramérica.

La dinámica suramericana está mostrando que las posibilidades reales de construir, de redefinir, la integración son bastante posibles en cuanto están presentes temas esenciales para los países como son los de infraestructura y los temas energéticos. A ese respecto se puede considerar que —más que a la consolidación de bloques homogéneos— se está asistiendo a la existencia de vasos comunicantes entre los diferentes procesos de redefinición en curso en la región. Incluso la reciente Cumbre celebrada en Margarita demuestra cierta madurez al aceptar que existen diversos modelos políticos, diversos modelos de desarrollo, distintas velocidades y diferentes formas de inserción en la globalización. De ahí que los tres temas de mayor debate en Margarita fueron el etanol, la OPEP del gas y el tema del Banco del Sur —sobre los que hubo posiciones muy distintas— y que muestran que son posibles consensos bastante más pragmáticos que los que la ideología pareciera permitir en los distintos procesos regionales.

De manera que se puede concluir que se está desarrollando un proceso de predominio del pragmatismo que permite a los países un entendimiento por encima de las diferencias políticas y eso ayuda al hecho de que todos los gobiernos, incluso el venezolano, tienen necesariamente que atender desafíos mayores que los de su propio proyecto nacional.

Edgar Otálvora

Coincido en que la integración en Suramérica está en un proceso de reacomodo y reorientación, lo que se ha identificado con las palabras fragmentación y redefinición, en búsqueda de nuevo sentido. Se trata de una situación que no sólo priva para la Comunidad Andina, algo similar parecería que se está produciendo en Mercosur, y si se suma a esto el proyecto de crear una alianza en alguna medida suramericana del tipo que está proponiendo el gobierno venezolano, se está frente a todo un proceso de fragmentación y redefinición de contenidos y actores nuevos.

A raíz de las posiciones muy difundidas en medios políticos en contra del libre comercio —para ser realistas— faltaría en este momento colocarle al término un apellido, libre comercio *con* Estados Unidos, y libre comercio *sin* Estados Unidos. Ninguno de los países, incluso los que mantienen posiciones más de izquierda, que se inscriben dentro del proyecto que se dirige desde Caracas y dentro del cual Bolivia actúa y Ecuador parece querer sumarse, está en contra del libre comercio. Cuando el eje más radical de izquierda de América Latina firma un Tratado de los Pueblos, lo que firma es un tratado de libre comercio entre ellos. De manera que el tema libre comercio pareciera no ser definitorio de las diferencias que pueden establecerse entre los distintos grupos. En la separación entre los países lo que parece privar es el tema de las alianzas políticas, posiciones adornadas, formalizadas en los titulares de prensa con el discurso en contra del Consenso de Washington. Puede considerarse que la furia por cobrar impuestos por parte del gobierno de Venezuela es una aplicación estrictísima de uno de los diez puntos del Consenso de Washington, al tiempo que siendo uno de los puntos del Consenso conseguir una tasa de cambio competitiva, Colombia —que pareciera estar suscrita al Consenso de Washington— no lo logra, de manera que hay mucho de propaganda y lugares comunes que forman más parte de las primeras páginas de la prensa que de la realidad “real”, por decirlo de alguna manera.

Esto lleva a señalar que el tema de la integración se ha ido haciendo cada vez más complejo, y en cierta medida ha dejado de ser tema de debate académico o un tema de economistas que negocian aranceles, para convertirse en un tema político sustantivo en un momento en el cual la discusión política está montada en la ola de los medios de comunicación que se compran y escuchan todos los días.

Sin embargo, en medio de todos los debates económicos, temas como el energético y la infraestructura, entre los más importantes, están en la agenda y son fundamentales. A este respecto, a título de ejemplo, vale la pena señalar que hace poco un ingeniero venezolano mostraba un proyecto para construir un gasoducto que no destruyera la Amazonia, trazándolo en paralelo a la costa del Pacífico. Incluso ese es un punto sobre el cual la Comunidad Andina pudiera ofrecer una opción espacial para una solución energética de importancia capital para toda Suramérica, distinta a la que ha propuesto el gobierno venezolano. El tema de infraestructura, igualmente, sigue vigente y es no sólo de interés andino sino también brasileño. La salida al Pacífico es un problema también pendiente, de manera que se está ante temas con

un profundo contenido político porque atienden a los compromisos que los países tienen en sus alianzas con sus vecinos.

Luis Fernando Fernández

Se ha tratado ampliamente la temática de la Comunidad Andina pero no estaría completo el panorama si no se toca de manera particular el tema del retiro de Venezuela de esta comunidad. Esta salida tiene implicaciones para la región, no sólo para la parte andina. En el momento de la separación, algunas reacciones tuvieron que ver con la inquietud de los países que integran la CAN, cada uno de ellos con reacciones diferentes. Colombia y Perú solicitando el reingreso inmediato, Ecuador, para ese entonces bajo la presidencia del doctor Palacios, asumió una posición mesurada, y Bolivia tuvo una actitud mucho más rígida, hasta con insultos hacia los presidentes de algunos países. Afortunadamente se impuso el criterio nacional y la situación bastante crítica que se generó ha sido superada.

Otra consecuencia inmediata fue la paralización de las conversaciones de la CAN con la Comunidad Europea. Justamente la salida de Venezuela se produjo cuando se estaba llevando a cabo una reunión de negociación en Bruselas, lo que implicó la inmediata suspensión hasta tanto la situación pudiera aclararse. Se encendieron entonces las alarmas de las cancillerías, no solamente en la parte andina; en Latinoamérica hubo una suerte de sacudón por la salida de Venezuela de la CAN. Fue en ese momento cuando se celebró la Cumbre en La Habana y la inmediata nacionalización del gas boliviano, lo cual desencadenó gran preocupación, especialmente en los países del cono sur y, en particular, en los que dependen de la importación del gas de Bolivia, como Brasil y Argentina.

También, aunque no hubo mayores explicaciones, se produjo la salida de Venezuela del Grupo de los Tres (G-3: México, Colombia y Venezuela). La disolución de ese grupo, por lo menos en lo que respecta a Venezuela, aunque no se han dado razones, podría explicarse como una forma de evitar que por la vía del G-3 pudiesen entrar productos de algún otro país utilizando el acuerdo con Colombia.

Por supuesto, el ingreso de Venezuela al Mercosur también desencadena otras situaciones, una de ellas —quizás en el origen de la decisión de salida de la CAN— es que de alguna manera habría dificultades para manejarse simultáneamente en dos mercados comunes, con dos aranceles externos común, lo que iba a producir situaciones bastante complejas. Es probable que haya habido un análisis de tipo económico y, entre otras, la consideración de alcanzar a un mercado de 150 mil millones frente a otro que a la fecha no supera los 9 mil millones. Un mercado donde Venezuela piensa que se puede insertar con algunas posibilidades, y que traería —más que unión con todos los países del Mercosur— la posibilidad de hacerse de un mercado ubicado en el norte y nordeste de Brasil, con una población aproximada de unos 30 millones de habitantes, que está prácticamente al lado del Brasil industrial, el Brasil ubicado al sur, con el que es difícil tener una relación comercial. Ese mercado ubicado entre el norte y el noreste de Brasil puede tener una relación casi de tú-a-tú con Venezuela porque son merca-

dos similares en cuanto a población, en cuanto a capacidad industrial, y cuenta —en el caso de Brasil— con una situación de aislamiento respecto del resto de ese país.

Por supuesto, traer productos desde el sur de Latinoamérica, desde Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, se encuentra también con un inconveniente y es que aunque pueden ser más baratos en términos de aranceles tienen en la práctica que enfrentarse a la competencia con productos provenientes de países vecinos.

Por otra parte, con el ingreso de Venezuela al Mercosur el país buscaría mejorar la diversificación de su cesta petrolera, con una serie de inversiones en esa zona con la finalidad de resolver, por una parte, la colocación de productos petroleros, pero también con la posibilidad de mejorar la balanza comercial que podría ser desfavorable si se mantiene exclusivamente en el mercado de bienes y servicios. Adicionalmente está la situación de la proyección ideológica y política del presidente Chávez hacia el sur. En consecuencia, este ingreso sirve a su proyecto político de integración y de liderazgo en la zona.

Por supuesto, hay algunos escenarios que pudieran manejarse en relación con la CAN:

— El escenario más recomendable sería, como fue señalado, la recomposición de la CAN con los cuatro países que se mantienen en ella, es decir, un escenario en el que prive la parte económica y puedan hacer un reajuste, con la posibilidad de que Chile logre integrarse a esa comunidad.

— Existe la posibilidad de que Venezuela, que dejó abierta una rendija, logre su regreso si se produce un rechazo de Colombia y Ecuador a los TLC. Tomando en consideración las actuales dificultades que hay en el Congreso norteamericano para la aprobación de estos tratados, no se descarta una situación que permitiera el regreso de Venezuela a la CAN.

— Finalmente, si se impone la situación política e ideológica, es probable que Bolivia salga del bloque, arrastre a Ecuador y se produzca una fragmentación que dé al traste con la permanencia de la CAN. Este sería el escenario menos deseable.

VI

Las tensiones *versus* las intenciones en Mercosur

Rut Diamint

Comentaristas: *Edmundo González / Flavio Carucci*

Desde el Programa Creando Oportunidades, desarrollado por el Woodrow Wilson Center desde 1991, se ha planteado que solamente comunidades plurales de Estado cuyas expectativas de intercambio mutuo se pueden realizar con la voluntad de mantener la paz son las que pueden constituir sistemas estables de integración, y desde esta perspectiva se está trabajando para crear foros y compartir criterios. De acuerdo con el enfoque, lo primero a tomar en consideración y recordar es cómo nació el Mercosur.

Uno podría creer que cuando se empieza a pensar el Mercosur, en 1985, se hacía por un interés de escala productiva y comercial, pero no fue así. En realidad, en Argentina, la preocupación del gobierno era de otro orden y consistía en cómo desmilitarizar la política y el Estado mismo. Ese era el foco con el cual se empiezan las conversaciones con Brasil, tanto así que ese acercamiento inicial Argentina/Brasil fue diseñado por un físico que en ese momento era además funcionario de la cancillería argentina, muy cercano al presidente Alfonsín, Jorge Sábato, quien desarrolló una política común sobre el uso pacífico de la energía nuclear, primer impulso para el Mercosur.

Es cierto que después el Mercosur fue desarrollando un intercambio comercial más que una profundización del acuerdo integral de cooperación. Fue un proceso bastante largo. También es cierto que Mercosur sobrevivió a muchísimas discusiones y contratiempos como tal situación creada por Brasil, tal otra creada por Argentina, o más recientemente las resistencias de los dos países más pequeños, pero la verdad es que Mercosur sobrevive porque hay un proyecto político detrás de ello. Es un régimen imperfecto, es un mercado común con aranceles externos plagados de exenciones, pero lo importante de Mercosur es su impacto político en cada uno de los Estados parte, que se expresa en resultados concretos entre los cuales hay algunos que es importante resaltar:

1. Se generaron condicionamientos para mantener la estabilidad política interna.
2. Obligó a tener políticas internas.
3. Generó consenso acerca de que había que cumplir con las cláusulas que el mismo mecanismo iba estableciendo como la del régimen democrático, la de zona de paz, la de zona libre de armas de destrucción masiva.
4. Que la demostración efectiva del Mercosur era ratificar el compromiso tanto como sistema de resolución de conflictos como en tanto que sistema de incremento de la seguridad internacional.

5. Contribuyó al fortalecimiento de las instituciones democráticas de cada uno de los Estados y obligó a que cada institución fuera diseñándose de forma específica para cumplir las funciones que le tocaban. Y eso, necesariamente, implicó el control democrático de las Fuerzas Armadas, con diferencias entre los cuatro países pero haciendo que la política de defensa fuera vista como una política de Estado. En consecuencia, esto obligó además a los Estados a compartir abundante información no sólo sobre seguridad y defensa sino también sobre la política exterior.

De estos principios se desprende que no puede haber una comunidad de seguridad cuando conviven diferentes visiones sobre el uso de la fuerza legítima. Como demuestran otras experiencias, particularmente la más exitosa que es la Unión Europea, no puede haber un acuerdo económico si no está resuelto el acuerdo de seguridad. Cuando no hay acuerdo sobre el uso de la fuerza legítima, cuando la presencia militar dentro del Estado debilita el juego de las distintas fuerzas políticas, es muy difícil construir un acuerdo de integración, un acuerdo compatible sobre política.

Es importante tener en claro —y ha sido la experiencia particularmente de Argentina— que en democracia cada institución debe tener su rol y esto debe ser una condición para el fortalecimiento de un sistema democrático de representación y de inclusión de todos los sectores sociales. Es imprescindible, por lo tanto, que la integración se plantee entre Estados que demuestran compartir los principios de respeto al estado de derecho. Si uno actúa en términos de amigo/enemigo, sin capacidad de crear consensos internos, es muy difícil que se pueda ser motor de un acuerdo de integración. La práctica de crear consensos internos es necesaria para llegar después a consensos regionales porque un sistema de integración es una política de Estado y no una política de gobierno y si las distintas fuerzas sociales están comprometidas en este sistema, algún día se va a producir un cambio y es necesario que los demás Estados confíen en la continuidad del sistema.

De la misma forma, muchas de las ideas que se han trabajado están contenidas en el modelo de crear comunidades de seguridad, un concepto experimentado y sobre el cual se ha escrito abundante literatura, cuyo fundamento es que no se puede crear una comunidad de seguridad a nivel regional si no se piensa primero en una comunidad de seguridad a nivel nacional para lo cual influyen factores como el espectro político, social, laboral, académico que comparten y participan en la toma de decisiones y en la generación de políticas en el área de defensa y seguridad.

Para concluir, a los países de Mercosur les interesa la integración y esto es lo que debe quedar claro como enseñanza de este proceso. Hay un compromiso, no solamente de los gobiernos sino de la sociedad, de crear un medio regional seguro donde se compartan expectativas y se ayuden unos a otros. Pero el interés no es sólo cualquier tipo de cooperación ni cualquier tipo de integración. Interesa cooperar en un medio que garantice que las mutuas diferencias no serán resueltas por la violencia ni por la vía militar. Interesa la integración soste-

nida en valores de la democracia; la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales; la tolerancia, el respeto mutuo, la reciprocidad, sin hegemonías y sin imposiciones.

Edmundo González

Primeramente es conveniente destacar los avances que muestra la región en materia de consolidación de la democracia así como de profundización de la integración y de un mayor grado de institucionalización de ésta. Estos factores han contribuido para que se asuma como una región sin conflictos bélicos interestatales, con un buen desarrollo institucional para enfrentar las amenazas a la comunidad y con un andamiaje —en términos de integración de compromisos políticos— basado en los valores democráticos. Es importante señalarlo porque, tal como se ha mencionado, las nuevas concepciones de seguridad democrática requieren de una plataforma democrática sustentada en valores compartidos. Valores entendidos como el ejercicio de la tolerancia, el respeto al pluralismo político, el equilibrio y la autonomía de los poderes, la alternabilidad, el respeto por las libertades individuales, la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes, por citar algunas referencias a compromisos que están vigentes en esta materia y que se recogen tanto en la Cláusula Democrática de Mercosur como en una serie de documentos y de instrumentos de integración y mecanismos políticos de la región.

El segundo comentario tiene que ver con las reflexiones en torno a la estabilidad política, la predictibilidad y eficiencia económica y el respeto por el estado de derecho que son elementos fundamentales. Es decir, que la seguridad no está limitada a las cuestiones de paz sino que está estrechamente asociada a la consideración democrática, al fortalecimiento de las instituciones y al rechazo de la utilización de la vía militar para solucionar las diferencias.

Una tercera reflexión tiene que ver con el debate ideológico al cual se asiste en la región y los temores sobre el desafío que comporta la llamada ideologización de los procesos de integración. Más allá de lo que pueda observarse en relación con los bloques de integración que avanzan normalmente en procura de sus objetivos originarios, se percibe un creciente recelo sobre el futuro del bloque ante los desafíos que comportan y las críticas que se hacen al modelo integracionista mismo. A tal fin, hay que recordar las expresiones del presidente Lula cuando afirmaba en la Cumbre Presidencial de Mar del Plata “que el bloque no ha estado nunca tan bien como está ahora”, al tiempo que en la misma reunión se mencionaba la necesidad de “reformatear” Mercosur, en el sentido de descontaminarlo de las enseñanzas neoliberales. El futuro del bloque está pues directamente ligado al debate sobre la ideologización. Esta tesis es un buen ejemplo del nuevo paradigma que parece dominar el debate integracionista y recrear por momentos debates ya superados en términos de lo que fue la confrontación ideológica en tiempos de la Guerra Fría.

En contraposición pueden verse los casos de Brasil, Chile y Uruguay que son muy buenos ejemplos de que su definición política no está reñida con la sana aplicación de medidas de disciplina fiscal, de competitividad económica, de libre comercio, de atracción de

inversiones. Aquí vale la pena mencionar cómo Chile mantiene un TLC con Estados Unidos así como también lo tiene con China y algunos otros países, y el ejemplo uruguayo, que busca abrirle paso a sus exportaciones en el marco de un arreglo comercial con Estados Unidos. Lo sustantivo, en todo caso, es que se pueda avanzar hacia una integración que no se empantane en el debate ideológico.

En el contexto de las tensiones *versus* las intenciones —ya no en el marco propiamente del Mercosur sino en el contexto regional— cabe hacer mención de la figura de UNASUR que, a juicio de sus promotores, aspira a estructurarse a partir de la cooperación interestatal en línea con lo discutido en cuanto a la propuesta del ALBA, que como se señaló anteriormente es una propuesta de valores más que de contenidos, y que más que un proyecto de integración es un proyecto de vida. En ambos casos se parte de una premisa esencial: no se trata de la integración de los mercados —como originalmente había sido diseñado el modelo de integración—, la agenda está centrada en un nuevo estilo en el que el factor político juega un papel predominante. En este sentido, UNASUR —a juicio de quienes promueven esta iniciativa— vendría a subsumir los acuerdos sub-regionales en una convergencia hacia la unidad. Eso al menos es lo que sostienen quienes respaldan esos nuevos paradigmas de integración a los que se puede llamar de unidad regional.

Por último, en relación con la postura venezolana sobre la integración, desde la perspectiva del gobierno de Venezuela a partir del año 1999, esta postura va más allá de lo que fue la CAN, más allá de lo comercial, más allá de lo regional, para incluir no sólo lo político, lo social, lo cultural, sino también algunos aspectos militares. En ese sentido, la propuesta, por ejemplo, de un ejército del sur ha levantado varias críticas. Parte esta postura de una visión anfictiónica de la integración en línea con lo que fue el ideario del Libertador, modelo que aspira a ir más allá de los acuerdos económicos de las preferencias arancelarias y que apunta a la integración política para generar un bloque geopolítico que pueda oponerse a otros centros de poder.

Flavio Carucci

Más allá de las bondades conferidas al Mercosur, es importante retomar aquellas relacionadas con la consolidación de la democracia. Se ha hablado de un concepto de seguridad que se acerca al concepto de seguridad humana (en el que están implícitos los temas de la democracia, del fortalecimiento institucional y el hecho de poder dirimir conflictos sin recurrir a medios militares), además de señalar que Mercosur, desde su concepción, intentaba proponer relaciones sanas de seguridad en la región así como promover un nuevo modelo de desarrollo. La pregunta que surge es si efectivamente ese desiderátum más trascendental fue cumplido y señalaría al respecto que no, porque el Mercosur —si se revisan los fundamentos de su creación— se ha quedado corto. El principal argumento es la afirmación que Mercosur no ha apuntalado una verdadera integración suramericana.

¿Cómo puede definirse actualmente el Mercosur? Simplemente como un acuerdo aduanero que pretende convertirse o transformarse en un mercado común al tiempo que

pretende también promover una integración política. Pero hay todo un conjunto de debilidades estructurales que imposibilitan al bloque apalancar estos procesos de integración para crecer. La primera debilidad tiene que ver con la dimensión sobre la cual se fundamentan las aspiraciones de integración del Mercosur, que privilegia el aspecto comercial sobre todas las demás dimensiones de la integración. Ciertamente se conoce que los aspectos comercial y económico son fundamentales, pero estos deberían estar acompañados por elementos políticos y sociales que le den un carácter más “político” a la integración. Eso no se ha logrado, no ha pasado más allá de una fase retórica.

Una segunda debilidad, muy vinculada a la primera, es que el Mercosur carece de un proyecto político claro y compartido por sus miembros y a este respecto cabe una aclaración porque parece que con frecuencia se habla de lo político y de lo ideológico como si fueran lo mismo. Lo político se refiere a la direccionalidad de la evolución del bloque. El nuevo mapa político en América del Sur, con la emergencia de gobiernos que se autodefinen o son definidos como de izquierda o progresistas como el de Tabaré Vázquez en Uruguay, el de Evo Morales en Bolivia, el de Hugo Chávez en Venezuela, el caso de Lula en Brasil, permitieron esperar un florecimiento de la integración suramericana por una suerte de afinidad ideológica entre los países y, sobre todo, entre los países que conforman el Mercosur. Pero eso ha sido sólo parcialmente cierto. Al remitirnos a la historia reciente se observa cómo el bloque ha funcionado con una cierta unidad ante temas importantes, por ejemplo, la oposición a las negociaciones del ALCA en la Cumbre Presidencial de Mar del Plata, también en la reunión de Doha, pero igualmente se ha visto un bloque desunido en otros momentos importantes como en los casos de la elección del Secretario General de la OEA y la presidencia del BID, además de recientes fricciones como el de la instalación de la planta de celulosa que ha generado un conflicto entre Uruguay y Argentina aún no resuelto y para el cual el Mercosur no cuenta con mecanismos propios. Así mismo en el caso de amenazas de Brasil cuando Evo Morales decidió nacionalizar la extracción de gas en Bolivia.

De manera que esta suerte de afinidad ideológica no ha funcionado tan bien y no ha sido garantía de un proyecto político común. Por el contrario, más bien dentro del bloque persisten diversas visiones sobre la integración, la democracia, la unidad regional y la seguridad nacional. No se sabe si esta es la razón por la que han proliferado otros mecanismos, otras propuestas, otras iniciativas integracionistas (caso ALBA, propuesta por el presidente Chávez, o caso Tratado de Comercio entre los Pueblos propuesto por Evo Morales), porque no hay un proyecto político común y por eso resulta difícil encontrar un hilo conductor que amarre estas diferentes iniciativas.

Otra hipótesis puede ser que Mercosur —en vista de sus propias limitaciones, su cuasi unidimensionalidad— imponga camisas de fuerza a países que tienen propuestas de integración elaboradas bajo criterios de cooperación y complementariedad, como podrían entenderse los casos de Bolivia y Venezuela.

Otra debilidad, puntualizada anteriormente, es la ausencia de una institucionalidad supranacional. Mercosur fue concebido como un acuerdo intergubernamental —diría más: interpresidencial— ya que los grandes conflictos sólo pueden ser dirimidos a través de la negociación entre presidentes. Las decisiones regionales, para poder ser efectivas, tienen que permear las legislaciones nacionales. Pero no existe un derecho comunitario al cual los países miembros puedan acudir para resolver con celeridad sus diferencias.

Un problema adicional es el de las asimetrías. Mercosur no ha sido capaz de definir —y mucho menos instrumentar— mecanismos capaces de reducir las profundas asimetrías de la región. Ello se evidencia, por ejemplo, cuando aspectos bilaterales han estado por encima de decisiones del bloque, y se ha dado en varias oportunidades cuando entre Argentina y Brasil se han logrado acuerdos que luego han sido presentados a los otros miembros como decisiones tomadas, originando conflictos, en particular con los socios menores. Sin embargo, paradójicamente, ninguno de los socios del Mercosur ha insistido mucho en avanzar hacia una superinstitucionalidad que permita operar con un marco regulatorio mucho más sano. En cuanto a las asimetrías, puede que el problema se profundice con la entrada de Venezuela y Bolivia al Mercosur. Otro factor es que las sociedades de los países que conforman el bloque en la mayoría de los casos han estado de espaldas a los acuerdos. Ha habido poco o insuficiente involucramiento de los actores privados, de la sociedad civil, de los actores políticos en las decisiones del Mercosur, lo que evidentemente atenta contra la viabilidad de permanencia o sostenibilidad del bloque.

Surge la pregunta entonces: ¿cuál es el futuro del Mercosur de cara a la integración regional? El Mercosur necesita reinventarse.

VII

Integración energética, seguridad regional y gobernabilidad democrática en América Latina

Elsa Cardozo

Comentaristas: *Antonio De Lisio / Rafael Quiroz*

Esta presentación busca darle una mirada política al papel que viene desempeñando y podría desempeñar la integración energética en materia de integración regional. En primer término, cabe señalar que la integración energética ha sido definida políticamente por diferentes líderes de la región de dos formas que parecen lo mismo pero no lo son. En un caso se percibe como una semilla para profundizar el proceso de integración, mientras que en el segundo se percibe como el elemento central, el componente que se va a poner en marcha para una nueva manera de integrarse y que es el factor presente en el nuevo discurso venezolano. Dos visiones distintas de lo que significa integración regional.

Esto ocurre en un momento de auge de lo energético por la revalorización económica de los hidrocarburos, entre ellos la del gas, y por la revalorización política del factor energético que acompaña el contraste entre los grandes productores y exportadores y los más vulnerables importadores regionales. Un contraste que se ha hecho cada vez mayor y que ha puesto a la vista tanto el potencial que tiene la energía como factor de integración en la región como el papel de una región tan heterogénea desde el punto de vista de la riqueza energética. Esto conduce, particularmente en los últimos dos años, a la situación de politización del tema energético y de “energización” del tema político. En este sentido, lo que ha venido ocurriendo en América Latina ha sido más para mal que para bien, en el marco de la posibilidad de mayor cohesión o a la tendencia a la fragmentación regional, a la posibilidad de profundización del regionalismo por lo que significaría una América Latina integrada energéticamente en términos de actividades económicas, en términos de gobernabilidad, por cuanto la integración energética bien administrada podría facilitar las condiciones económicas y sociales para la gobernabilidad y para la integración económica.

Eso lleva a considerar el doble papel que desempeña la energía porque, además de los aspectos positivos asociados a la integración, también se trata de un tema que podría ponernos a todos muy nerviosos y llevar a la región al borde del colapso si se desenvuelve la integración en un contexto político altamente ideologizado y en términos que fragmenten y se rompan las posibilidades de cohesión. Por lo tanto, las preguntas a hacerse en esta materia son:

- cómo podría la energía convertirse en un factor que contribuya a la genuina cooperación y no genere conflictos de competencias;
- cómo construir un marco de institucionalidad estable en lugar de permitir su acelerado deterioro;

— en qué medida puede contribuir a construir genuinos vínculos de integración y no relaciones de competencia y dependencia.

Lo que se ha estado viendo, en particular en los últimos meses, es un gran impulso a la integración. En mesoamérica, un gran impulso al Plan Puebla-Panamá, el fortalecimiento de la infraestructura energética mesoamericana; en el cono sur, la reactivación de contratos fortaleciendo la ya existencia de los gasoductos que unen esos países. Así mismo, la propuesta venezolana que ha ido transitando desde una concepción donde lo que se planteaba en los Acuerdos de San José y que de alguna manera se vio reflejado en los Acuerdos de Caracas del año 2001 se fue transformado rápidamente desde finales de ese mismo año 2001, a partir del Convenio de Cooperación Integral con Cuba y luego a partir de todos los convenios tipo ALBA promovidos por el gobierno venezolano con una perspectiva completamente distinta a la que tenían los convenios de cooperación centroamericanos y caribeños. Predominan en las versiones más recientes componentes en los que el gobierno venezolano se ubica en el centro de una red de distribución de recursos energéticos, una red regional de distribución de beneficios de toda naturaleza vinculados al tema energético, que evidencia una postura diferente a la propuesta de cooperación de San José, mucho más simétrica en términos de lo que cada país ponía.

La energía entonces, según se maneje desde el punto de vista estratégico, puede propiciar también desintegración, inestabilidad. También puede contribuir a la gobernabilidad democrática por su potencial para desarrollar interdependencias positivas si están basadas en relaciones de genuina cooperación, basadas en propósitos de construcción de relaciones institucionales, de definición de reglas de juego claras, de aprovechamiento regional de las grandes ventajas que tiene la región —una región conjuntamente autosuficiente—, sin perder el sentido de la cooperación y la solidaridad. Pero también la utilización de la energía, en un contexto como el que pretende desarrollar Venezuela colocándose como centro de una red de distribución de beneficios, puede contribuir a generar interdependencias muy negativas en la medida en que se promuevan consideraciones políticas e ideológicas o en la medida en que se condicionen los términos económicos mismos que, en nombre de la solidaridad, resulten en una relación desigual, generadora de dependencia, con impredecibles consecuencias.

Las condiciones prevaletentes no son muy favorables a la integración aunque paradójicamente se comenta que la integración necesitaría de un mayor impulso. Es un momento en el cual la energía podría desempeñar un papel muy importante para superar la fragmentación y conflictividad subnacional que se ha venido manifestando en América Latina. En este sentido, ésta se ve en términos de gobernabilidad en numerosos casos, con respuestas que no están muy claras como las que plantean las propuestas constituyentes cuyas consecuencias no se conocen, en circunstancias donde hay una gran fragilidad de base, y en presencia también de una fuerte tendencia a la fragmentación como se aprecia en Mercosur. Todo ello permite observar que las condiciones de la actual institucionalidad regional no son favorables a que la

energía desempeñe un buen papel y que, por el contrario, lo energético se pueda convertir en un mal sustituto de lo que es una necesidad mucho más compleja.

En cuanto a las tendencias en materia de integración energética, puede señalarse que:

1. En materia de seguridad, la competencia por recursos energéticos va por un lado mientras por el otro van la cooperación y seguridad de América. La conciencia de la vulnerabilidad de los países latinoamericanos así como del peligro de depender de un solo país ha venido generando una cada vez mayor competencia en el ámbito energético. Por ejemplo, las declaraciones y contradecaraciones del gobierno venezolano sobre el tema del etanol y la posición de Brasil dispuesto a impulsarlo.
2. En términos de gobernabilidad, una tendencia en la que reaparece la figura del líder mesiánico y la relación directa del líder con la masa la vemos como necesidad de construir socialmente la gobernabilidad (caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador), frente a otra tendencia donde países como Brasil y Chile tratan de construir la gobernabilidad a partir de negociaciones sociales, esto es, a partir del fortalecimiento institucional.
3. En materia de integración hay una tendencia donde el tema gira en torno a la seguridad del Estado y otra que gira en torno al fortalecimiento de las sociedades y su capacidad de negociación nacional e internacional. En el primer caso, la integración es vista como elemento político de seguridad que contribuye a una mirada defensiva de la seguridad, una visión que se aleja de la integración como régimen que se construye colectivamente. Por el otro lado, la integración vista como un proceso integral y a largo plazo le otorga a la seguridad un sentido más cooperativo donde la gobernabilidad social es producto de la negociación y no del control del líder sobre las masas o de un país sobre otro, visto como un sistema de diálogo permanente, donde hay principios, reglas y valores que se negocian para construir una relación que no depende de la voluntad de un país o de otro, sino que se sustenta en la institucionalidad.

Desde esta perspectiva se puede avizorar que lo energético va a promover más fragmentación en la medida en que no se basa en reglas y principios compartidos y se enfrenta a otra visión donde lo energético es una pieza para favorecer alianzas, enfrentar enemigos externos como Estados Unidos, la globalización, el libre mercado, entre otros.

De modo que si se pudieran apuntar algunas recomendaciones, de lo que se trata es de alentar la colocación de este tema en la agenda pública, analizarlo con franqueza y no negar que lo energético tiene un papel muy importante que jugar en la integración pero tiene que hacerlo de manera constructiva. Sobre esto, los países que tienen mayores recursos energéticos tienen más responsabilidad, pero cuando se promueve una integración energética y ésta se combina con el retiro de la CAN o una entrada forzada en el Mercosur, no pareciera que la energía sea un elemento fortalecedor de la integración sino que, por el contrario, se repiten esquemas criticados en el pasado como los del momento de la construcción del NAFTA.

Otra recomendación es la necesidad de llamar la atención de las ONG y de todas aquellas organizaciones que tengan la capacidad de influir en las agendas gubernamentales porque

hay un debate que tiene que darse y tiene mucho que aportar a este tema especialmente sobre la necesidad de trabajar en profundidad el tema institucional, dentro y fuera del país.

Antonio de Liso

Para abordar este tema es importante introducir el punto de vista ambiental, un elemento que está haciendo que —a pesar de que América sea un continente con enorme cantidad de recursos energéticos— la energía de alguna manera se está convirtiendo en un factor de destrucción de las condiciones de vida en nuestros territorios. Y, precisamente, una de las principales actividades humanas que mayor impacto produce en toda América Latina y el Caribe es la actividad energética.

Entre los proyectos que se tienen existe la probabilidad de perder cerca de 30%-40% de la cubierta boscosa o de sabana, lo que representa un impacto verdaderamente grave sólo referido a daños causados por actividades de exploración de nuevos proyectos. Pero si se examina el caso específico de algunas fuentes de energía consideradas limpias desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo la hidroeléctrica, resulta que en Brasil hay un millón de desplazados como consecuencia de la construcción de centrales hidroeléctricas, una cantidad enorme de población en un país tan grande, que además está pensando en aumentar estas actividades en nombre del desarrollo, de las necesidades energéticas y en nombre de la seguridad del Estado.

58

Con respecto a las actividades a desarrollar en relación con el gas —para no entrar en la discusión acerca del posible impacto del gasoducto Caracas-Buenos Aires, que no se sabe si se va a construir o no— sí hay antecedentes y se conocen las consecuencias en los casos de otros gasoductos que han sido construidos en la región —por ejemplo el nor-andino, entre Argentina y Chile, lo que implicó el desplazamiento de la población que vivía entre Bolivia y Argentina—. Impactos que se ven magnificados por efecto de grandes megaproyectos y la construcción de enormes infraestructuras que los gobiernos contratan para garantizarse la seguridad energética. Es un componente sobre el cual hace falta reflexionar porque no es lo energético sólo un factor de negociación política que puede destruir la integración latinoamericana sino que la concepción misma de cómo se está empleando la energía y cómo se piensa que esa energía debe aprovecharse está acabando con las posibilidades de vida de las generaciones futuras.

Y es aquí donde, además de lo social, de lo económico y lo político, hay que abordar el componente ambiental. En función de esa reflexión desde lo ambiental, hacen falta consideraciones ecológico-políticas dentro de esa dicotomía presentada anteriormente entre la seguridad de Estado y la autonomía de la sociedad.

¿A cuál seguridad del Estado nos estamos refiriendo? ¿A la seguridad de Estado centrada en consideraciones geopolíticas decimonónicas que en situación de conflicto armado adquieren especial preponderancia? Hay que recordar que todavía algunos generales de Estados Unidos consideran que si se hubiese podido interrumpir el suministro de gas de Laos,

a Camboya y Vietnam (lo que se conoció como “la ruta Ho Chi Minh”¹³) los estadounidenses hubiesen ganado la guerra de Vietnam. Evidentemente, es una posición que brinda una dimensión del problema pero la seguridad del Estado debe ser abordada en estos momentos desde una perspectiva multidimensional porque es necesario replantear lo que se está considerando como Estado-nación y eso no quiere decir la desaparición de ese Estado-nación sino, todo lo contrario, saber que ese Estado que se tiene hoy debe ser reinterpretado en función de factores de carácter global. Por ejemplo, cuando se habla de impactos de la energía también se alude a la participación en eso que ha sido identificado como “cambio climático”, que obliga a tener una visión más globalizada acerca de este Estado.

Del mismo modo, dentro del ámbito nacional, se requiere pensar sobre qué está pasando con las comunidades que están siendo afectadas. Por ejemplo, han sido constantes las guerras entre las empresas petroleras y los pueblos amerindios de la Amazonia ecuatoriana, así como en Colombia los enfrentamientos de las comunidades indígenas con la Occidental Petroleum marcaron buena parte del fin del siglo pasado y fueron permanentes en el comienzo de éste. Se trata de situaciones que obligan a repensar el tema de los recursos y el aprovechamiento energético no sólo desde una perspectiva geopolítica sino también en términos ecológico-políticos. Porque si algo está claro es que cuando se menciona la necesidad de profundizar la democracia no es lo mismo hacerlo en Caracas, Buenos Aires o Bogotá, que hacerlo desde territorios ocupados —que, desde el punto de vista de las comunidades locales, para el caso es lo mismo que se trate de compañías transnacionales o del Estado-nación—. Se produce un proceso de privatización del territorio que ha desviado el sentido de lo que significaba el concepto de utilización de los recursos naturales que deriva en un proceso de enajenación territorial importante en América Latina para las comunidades locales donde la gente es desplazada (como es el caso, ya mencionado, de las migraciones internas en Brasil como consecuencia de la construcción de represas) o se convierten en no-habitantes.

Se dice que América Latina requiere más energía. El consumo energético en América Latina en los últimos 25 años se ha duplicado y, a pesar de eso, las situaciones de pobreza en general no han mejorado. Aunque se habla del modelo chileno, se siguen manteniendo —en el mismo Chile— importantes niveles de pobreza aunque en ese país ha aumentado el consumo de energía. También ha desmejorado de manera significativa (aproximadamente 7%) la eficiencia energética. Por lo tanto, habría que comprender que al hablar del vínculo economía-desarrollo es necesario precisar a qué tipo de desarrollo nos estamos refiriendo. No es sólo importante cuestionar las visiones antagónicas que muchos tienen respecto a lo social, porque es necesario saber cuáles son las características del desarrollo que se pretende alcanzar.

Cuando se hace referencia a la energía como palanca para impulsar el desarrollo, si es para copiar los modelos de desarrollo sustentable que caracterizan hoy al denominado mundo

13. Conjunto de senderos y caminos de 16.000 km de longitud total que discurrían desde Vietnam del Norte hasta distintos puntos de Vietnam del Sur, pasando por Laos y Camboya, por donde se conducían los suministros que la URSS y China enviaban a Hanoi (N. de la Ed.).

industrializado, va a ser difícil que se pueda acceder a mejores condiciones para el bienestar y para la vida en general de los seres humanos que habitan esta parte del mundo porque con esos modelos, que los economistas dicen son ejemplos a seguir, no se logrará compensar las carencias y necesidades de las grandes mayorías. Por eso hace falta hilar un poco más fino y especificar a qué tipos de sociedad y de desarrollo nos estamos refiriendo.

Cuando se habla de integración, desde el punto de vista de la ecología política, partiendo de un modelo naturalista, y se plantea como inquietud, se puede entender que la integración puede ser parasitaria, mutualista, o puede ser también simbiótica, cada una con niveles diferentes de cooperación y reciprocidad. Evidentemente, lo que hasta ahora parece haberse desarrollado en América Latina es una integración energética parasitaria.

Rafael Quiroz

El actual balance energético latinoamericano, en su estructura y funcionamiento, está dominado por las energías fósiles no renovables y es bastante probable que en un período largo se mantenga el predominio del petróleo y el gas como fuentes básicas de energía. Aquí hay que apuntar que América Latina no es deficitaria en términos energéticos. Al continente latinoamericano lo hace deficitario el consumo monstruoso de Estados Unidos como primera potencia del mundo. Canadá se autoabastece y exporta. Venezuela ofrece sus recursos energéticos, su petróleo y gas, por ser monoproducción en hidrocarburos, para apuntalar o catapultar desde la perspectiva energética la esperada y ansiada integración latinoamericana.

Las compañías de petróleo y de gas insisten en que se separe la cuestión energética de la política y que se permita construir sus ductos y centrales eléctricas según criterios económicos, sin la obligación de respetar las fronteras. Pero esta propuesta, a la que se suma una Carta Sudamericana de Energía, va a encontrar dificultades frente al derecho de algunos países para los cuales el control político de los recursos y las fuentes energéticas se constituye en un arma política por excelencia. Es acertada esta posición, pues se trata de una única pieza que estos países pueden mover para su futuro económico y para su ubicación estratégica en la integración latinoamericana y en el orden global. No hay, sin embargo, solución individual ya que los países latinoamericanos, tomados uno a otro, son demasiado débiles para aspirar a potencias comerciales en el mundo, además de que no están preparados para una confrontación asimétrica como la que amenaza ser.

Sin integración regional no habrá soberanía alguna digna de ese nombre pues se trataría de una pelea entre lobos y ovejas donde las ovejas estaríamos de antemano condenadas a perecer. La integración real exige integración comercial, económica, financiera, política y energética. Debe recordarse, por lo demás, que la Unión Europea también comenzó con un acuerdo energético como lo fue el Tratado sobre la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Aquí se ubica el punto en el que puede haber discrepancias, porque el análisis de la integración energética no puede circunscribirse a solamente tres conceptos: seguridad, gobernabilidad e integración económica. Lo que se ha identificado como "tendencias en materia de

integración energética” deja fuera conceptos fundamentales que deben añadirse y que están estrechamente vinculados como son los de soberanía, defensa y desarrollo, sin los cuales no se puede entender la integración. Para ello me baso en autores como Oystein Noreng¹⁴, Mariña Müller¹⁵ y los numerosos trabajos de Noam Chomsky en Estados Unidos que abordan estos seis conceptos señalados.

En cuanto a la dimensión estratégica, puede señalarse que en los procesos de integración energética, económica, financiera, comercial y política y latinoamericana, Venezuela aporta de manera determinante iniciativas para la integración a través de sus propios recursos y en coordinación con los demás productores de la región. De tal manera que, siendo este país una economía petrolera de exportación, es lógico que use el petróleo como arma geoestratégica de integración regional. Por lo tanto, el petróleo junto con el gas son piezas claves. En este contexto, las propuestas fundamentales de política del gobierno venezolano en materia internacional están dirigidas a la integración energética y de los mecanismos financieros suramericanos.

Sobre la segunda dimensión, la económica, se hace necesario señalar que América Latina no está ciertamente en posición de influir de manera significativa en el orden energético mundial, a pesar de la importancia de Venezuela en la OPEP, aunque sí puede tomar decisiones estratégicas para su integración energética, como lo ha venido haciendo. Los esfuerzos puestos en marcha para interconectar las redes de energía y gas de los países de la región deben ser fortalecidos y ampliados con la perspectiva de que, con el correr de los años, pudieran plantearse una red y un mercado común energético latinoamericanos. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) ha estimado que la integración energética podría permitir a la región ahorrar entre US\$4.000 y US\$5.000 millones de dólares por año.

La tercera y última dimensión es la de tipo político, sobre lo cual cabe mencionar que el carácter estratégico del gobierno norteamericano en el medio Oriente, por ejemplo, no puede ser más claro y no es posible dejar de considerarlo a la hora de formular políticas de integración entre los pueblos de América Latina que los coloque, unidos y homogéneos, frente a los grandes bloques comerciales y empresas “mastodontes” del comercio internacional petrolero globalizado. Latinoamérica, sin distinciones políticas, religiosas, geográficas o culturales de ninguna naturaleza, tiene la imperiosa necesidad de concurrir a un proceso de integración de toda la región, y Venezuela, como país en el que confluyen diversas características de política de la región, porque es caribeño y a la vez atlántico, andino y también amazónico, y además se encuentra “a caballo” entre Suramérica y el Caribe, debe unir sus esfuerzos en procura de la tan predicada integración.

Esto, por supuesto que se ha subsumido en el proyecto sub-regional de PetroAmérica, constituida por PetroCaribe, PetroAndina y PetroSur como palancas básicas para la integración

14. *El poder del petróleo, la política y el mercado del crudo*, 2003.

15. *Imperialismo, petróleo y profecías*, 2004.

regional y la participación en conjunto de los países de la región en el mercado mundial. Por lo tanto, PetroAmérica debe verse como un proyecto geopolítico en el cual convergen los tres bloques sub-regionales de cooperación e integración energética ya citados.

Notas sobre los Ponentes

Félix Gerardo Arellano

Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.

Cynthia Arnson

Directora del Programa para América Latina del Woodrow Wilson Center.

Raúl Benítez

Universidad Nacional Autónoma de México.

Demetrio Boersner

Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

Manuel Carbonell

Centro de Estudios de Información de la Defensa, La Habana.

Elsa Cardozo

Universidad Metropolitana, Caracas.

Flavio Carucci

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS.

Feijóo Colomine

Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, Venezuela.

Elías Daniels

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Venezuela.

Rut Diamint

Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires.

Luis Fernando Fernández

Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, Venezuela.

Edmundo González

Universidad Metropolitana, Caracas.

Francine Jácome

Directora Ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.

Nuevos retos de la integración en América Latina y el Caribe...

Edgardo Lander

Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

Antonio de Lisio

Universidad Central de Venezuela e Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.

Edgar Otálvora

Universidad Central de Venezuela.

José Raúl Perales

Programa para América Latina del Woodrow Wilson Center.

Rafael Quiroz

Banco Central de Venezuela.

Socorro Ramírez

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional en Bogotá.

64

Antonio Romero

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe-SELA.

Carlos A. Romero

Universidad Metropolitana e Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.

María Teresa Romero

Universidad Central de Venezuela.

Arlene Tickner

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional en Bogotá.

Kurt-Peter Schütt

Director del Instituto de Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS y representante de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela.

Listado de Participantes en el Seminario

<i>Acuña</i>	<i>Laura</i>	Delegación de la Comisión Europea en Venezuela
<i>Alcalay</i>	<i>Milos</i>	Ex Embajador de Venezuela ante la ONU
<i>Ambroso</i>	<i>Alida</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Alva</i>	<i>María Elena</i>	Banco de Desarrollo de la Mujer
<i>Álvarez</i>	<i>María de Los A.</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Barrios</i>	<i>Froilán</i>	Central de Trabajadores de Venezuela
<i>Benayas</i>	<i>Grecia</i>	Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Briceño</i>	<i>Guillermo</i>	Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores/ Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos
<i>Cadenas</i>	<i>José María</i>	Centro de Estudios de América-UCV
<i>Carrillo</i>	<i>Eva</i>	Asamblea Nacional
<i>Castro</i>	<i>Pablo</i>	Central de Trabajadores de Venezuela
<i>Centeno</i>	<i>Emarihel</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Cisneros Lavaller</i>	<i>Alberto</i>	GBC
<i>Colmenares</i>	<i>María Magda</i>	
<i>Constant</i>	<i>Héctor</i>	Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual-IAEDPG
<i>Contreras</i>	<i>William</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Cordones</i>	<i>Laura</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Crespo Carruyo</i>	<i>Ana Carolina</i>	Universidad Central de Venezuela-UCV/GBS
<i>Da Silva</i>	<i>Ana</i>	Asamblea Nacional
<i>De Michele</i>	<i>Giovanna</i>	Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>De Sousa</i>	<i>Velvet</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Faría</i>	<i>Jesús</i>	Central Única de Trabajadores de Venezuela
<i>Fernández</i>	<i>Fausto</i>	Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo
<i>Garófalo Laya</i>	<i>Fidel</i>	VIALPA S.A.
<i>Gamboa</i>	<i>María Carolina</i>	Asamblea Nacional
<i>Gather</i>	<i>Robert</i>	Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS
<i>González</i>	<i>Edmundo</i>	Profesor Universidad Metropolitana
<i>González Cruz</i>	<i>Diego</i>	Instituto de Petróleo y Minería (IPEMIN), Universidad Monteávila
<i>González Silva</i>	<i>Milko Luis</i>	Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>González</i>	<i>Gerardo</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV/ Universidad Católica Andrés Bello-UCAB
<i>González</i>	<i>Roxani</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV

<i>Hernández</i>	<i>Luis Fernando</i>	Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores/ Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos
<i>Hernández</i>	<i>Saúl</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Ibarra</i>	<i>José Gregorio</i>	Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela - CUTV
<i>Knorschildd</i>	<i>Mark</i>	Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS
<i>Lander</i>	<i>Luis E.</i>	Profesor Universidad Central de Venezuela
<i>Laguna</i>	<i>José</i>	FETIG
<i>Laya</i>	<i>Luís</i>	Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual-IAEDPG
<i>López</i>	<i>Andrea</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Luna Ramírez</i>	<i>Carlos Segundo</i>	Universidad Central de Venezuela-UCV/Global Business C.
<i>Márquez</i>	<i>Max</i>	Alcaldía El Hatillo
<i>Mendoza Potellá</i>	<i>Carlos</i>	Banco Central de Venezuela
<i>Mendible</i>	<i>Alejandro</i>	Profesor Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Monsalve</i>	<i>José</i>	Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual-IAEDPG
<i>Navarro</i>	<i>Carlos</i>	Alianza Sindical Independiente-ASI
<i>Ovelmejas</i>	<i>Maryuliette</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Otálvora</i>	<i>Edgar</i>	Universidad Central de Venezuela-UCV/News Letter Informator
<i>Pasquali</i>	<i>Chiara</i>	Consultora
<i>Pérez</i>	<i>Donny</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Porcarelli</i>	<i>Eduardo</i>	Profesor Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Puente</i>	<i>José Manuel</i>	Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA
<i>Quintana</i>	<i>Luís</i>	Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual-IAEDPG
<i>Rivas</i>	<i>Edickson</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Rodríguez</i>	<i>Laura</i>	Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual-IAEDPG
<i>Romero</i>	<i>María Teresa</i>	Profesora Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Rosales</i>	<i>Antonio</i>	Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual-IAEDPG
<i>Salas</i>	<i>Luís</i>	Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela - CUTV
<i>Sassone</i>	<i>Pedro</i>	Asamblea Nacional
<i>Segnini</i>	<i>Ana María</i>	Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo
<i>Silva</i>	<i>Lorice</i>	Estudiante Universidad Central de Venezuela-UCV
<i>Solórzano</i>	<i>Lurvis</i>	CADAFE
<i>Van Berkel</i>	<i>Déborah</i>	SINERGIA
<i>Zambrano</i>	<i>Amenothep</i>	Dirección General de Investigaciones y Desarrollo Legislativo. Asamblea Nacional
<i>Zenni Esteval</i>	<i>Leandro</i>	Embajada de Brasil

El **Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP** es una organización no gubernamental, fundada hace 20 años, que desarrolla diversos programas de investigación en relaciones internacionales y estudios sociopolíticos y ambientales en América Latina y el Caribe con el apoyo de fundaciones y organismos internacionales. En los actuales momentos sus líneas principales de investigación son:

- Integración, política exterior y seguridad en América latina y el Caribe.
- Participación ciudadana en el proceso de Cumbres de las Américas (en coordinación con la Corporación Participa de Chile y FOCAL de Canadá).
- Reformas políticas y movimientos sociales en la región andina (en coordinación con el Instituto de Estudios Peruanos-IEP).
- Reformas legales e institucionales y sus impactos sobre la sociedad civil en Venezuela (en coordinación con Sinergia).
- Ecología política en Suramérica.

El **Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales-ILDIS**, fundado en 1973, es una institución de apoyo y cooperación, sin fines de lucro, financiada con recursos del Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania, con la finalidad de contribuir a identificar, analizar y enfrentar los problemas políticos, económicos y sociales de Venezuela y América Latina en general, para lo cual desarrolla una intensa labor –tanto en Caracas como en muchos estados y regiones del país– en busca de la construcción de visiones comunes y compartidas concentradas en cinco áreas temáticas: gobernabilidad democrática, política económica, política social, diálogo social e integración regional.

El **Woodrow Wilson Center for Scholars** es una institución independiente apoyada por fondos públicos y privados, cuyo objetivo es fomentar la investigación y la discusión estratégica sobre temas de seguridad humana, nacional, regional y hemisférica por lo que –tanto en su sede en Washington como a través sus diversos programas, actividades y publicaciones– anima y favorece los contactos entre intelectuales, docentes, hacedores de política y líderes empresariales.

Este volumen se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2007, en los talleres de L+N XXI Diseños, C.A. Tel. (212)241.07.36 Caracas, Venezuela. En su diseño se utilizaron caracteres de la familia tipográfica Formata. En su impresión se usó papel Bond 24. La edición consta de 100 ejemplares.